

revista de agroecología



LEISA

volumen 27 número 4

A photograph showing a group of people gathered around a rustic wooden fence in a rural, dry landscape. On the left, a man in a yellow shirt and a man in a white t-shirt with a camera on his shoulder are looking towards the right. In the center, a man in a green shirt is operating a camera. On the right, two police officers in khaki uniforms are engaged in conversation. The scene suggests a community meeting or a media production in a rural area.

La defensa de
la tierra y el
territorio

LEISA revista de agroecología volumen 27 No. 4

Una publicación trimestral de la **Asociación Ecología, Tecnología y Cultura en los Andes**, en convenio con la **Fundación ILEIA**

Direcciones

Asociación ETC Andes

Apartado Postal 18-0745. Lima 18, Perú
Teléfono: +51 1 4415541, Fax: +51 1 4225769
www.etcandes.com.pe

Fundación ILEIA

PO Box 90, 6700 AB Wageningen, Países Bajos
Teléfono: +31 33 4673870, Fax: +31 33 4632410
www.ileia.org

Suscripciones a LEISA revista de agroecología

- por correo postal: **A.P. 18-0745, Lima 18, Perú**
- por internet: www.leisa-al.org

Equipo editorial de LEISA-América Latina

Teresa Gianella, Teobaldo Pinzás, Roberto Ugás
Colaboración editorial: Carlos Maza

Apoyo documental

Doris Romero

Diseño y diagramación

Carlos Maza

Suscripciones

Cecilia Jurado

Página web de LEISA-América Latina

Rafael Nova, Doris Romero

Foto de portada

Vazanteiros en defensa del territorio tradicional, durante autodemarcación en Reserva de Desarrollo Sostenible, Brasil, 2011. Foto: Giu

Impresión

Amauta Impresiones Comerciales
Empresa Editora El Comercio S.A.
Jr. Juan del Mar y Bernedo 1298, Chacra Ríos Sur
Lima 1, Perú

Financiamiento

La edición de LEISA revista de agroecología 27-4 ha sido posible gracias al apoyo de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete -Swedish International Development Agency-SIDA).

Los editores han sido muy cuidadosos en editar rigurosamente los artículos incluidos en la revista. Sin embargo, las ideas y opiniones contenidas en dichos artículos son de entera responsabilidad de los autores.

Invitamos a los lectores a que hagan circular los artículos de la revista. Si es necesaria la reproducción total o parcial de algunos de estos artículos, no olviden mencionar como Fuente a LEISA revista de agroecología y enviarnos una copia de la publicación en la que han sido reproducidos.

ISSN: 1729-7419

Biblioteca Nacional del Perú

Depósito Legal: 2000-2944

Tiraje: 10.000 ejemplares

contenido

4 Editorial

5 **El acaparamiento de tierras y de recursos naturales: violaciones del derecho a una alimentación adecuada**
Sofía Monsalve Suárez y Philip Seufert

9 **Escasez de tierra y perspectivas futuras**
Annalisa Mauro

11 **Los territorios kechwa-lamas y la superposición de sus modos ancestrales de relacionarse con la tierra**
Rider Panduro Meléndez

12 **La carrera global por el derecho a la tierra y el territorio en Brasil**
Sérgio Sauer

16 **"Mi territorio es mi vida". El río Cauca es para la vida y la producción**
Organización de Pequeños Ganaderos de Ituango, Antioquia Colombia, y Nubia Ciro

19 **La tierra y el poder**
Bertram Zagama

20 Agroeco

Entrevista a Roberto Ugás, coordinador general del proyecto

22 **Y después de la tierra, ¿qué? La lucha por ser reconocidos y no perder la tierra**
Matías García Rodríguez

25 **Rebelión en los *sertões* o la resistencia local de los pueblos ante la desterritorialización de la agricultura**
Carlos Alberto Dayrell

28 TRABAJANDO EN RED

30 FUENTES

32 **El rol de las comunidades campesinas frente a los recursos naturales y las actividades extractivas**
Martín Valdivia

35 **El impacto ambiental del proyecto minero Conga: más allá de lo enunciado**
Mirella Gallardo Marticorena

biodiversidad / biocomercio

37 **Consumo y demanda interna de ajíes nativos (*Capsicum* spp.) en Perú y Bolivia**
Jaqueline García Yi

39 NOTICIAS

40 **Tema especial: Río+20. ¿Qué matices proporcionará?**
Laura Eggens y Edith van Walsum

LEISA revista de agroecología trata de las opciones técnicas que se abren para los agricultores que buscan mejorar su productividad e ingresos. La agricultura sostenible y de bajos insumos externos o agricultura ecológica propicia el uso óptimo de los recursos locales y de los procesos naturales, y si fuere necesario, el uso eficiente de insumos externos.

Queridos lectores:

Con la edición 27-4 de **LEISA revista de agroecología**, la última del 2011, queremos agradecer muy especialmente a todos aquellos que nos han escrito manifestando su respuesta positiva a nuestra invitación "SIGUE CON LEISA EN EL 2012". Este apoyo de nuestros suscriptores nos anima a continuar trabajando por la agricultura familiar y la agroecología, con varias novedades que iremos dando a conocer y con el sorteo de importantes premios, como hicimos en 2011 con el viaje de estudio a Cuba.

Queremos así mismo agradecer las respuestas que ha recibido nuestra encuesta, mayormente a través de la página web pero también por medio del correo postal. Atendiendo a las opciones mayoritariamente preferidas y buscando no generar mayor costo por el procedimiento de pago a nuestros suscriptores, hemos optado por recibir sus contribuciones a través de Western Union. Los suscriptores del Perú pueden seguir depositando sus contribuciones en las dos cuentas bancarias que hemos abierto para ese fin.

Esperamos que encuentren de interés los artículos que hemos seleccionado para esta edición y hacemos votos para que sigamos contando con sus suscripciones en 2012.

Los editores

5

El acaparamiento de tierras y de recursos naturales: violaciones del derecho a una alimentación adecuada

Sofía Monsalve Suárez y Philip Seufert

En todo el mundo, inversionistas privados y públicos firman acuerdos con los gobiernos para tomar posesión o asumir el control de grandes superficies de tierra. Estos 'acaparamientos de tierras', tendrán un grave impacto en las poblaciones locales, especialmente en lo relacionado con su derecho a una alimentación adecuada.



16

"Mi territorio es mi vida" el río Cauca es para la vida y la producción Organización de Pequeños Ganaderos de Ituango, Antioquia, Colombia, y Nubia Ciro

Un caso evidente de lucha ante la usurpación de tierras por decisiones ajenas a los productores y pobladores de las zonas rurales de Combia.

25

Rebelión en los *sertões* o la resistencia local de los pueblos ante la desterritorialización de la agricultura

Carlos Alberto Dayrell

El artículo aborda la actual controversia entre agricultura y actividades extractivas en ecosistemas de extrema vulnerabilidad.



35

El impacto ambiental del proyecto minero Conga: más allá de lo enunciado Mirella Gallardo

Presenta la importancia crucial de la jalca o páramo andino como reguladora del sistema hídrico, en especial para la existencia de agua de calidad necesaria para el consumo humano y para la actividad agropecuaria. La jalca, como se conoce a esta formación de alta montaña en Cajamarca, Perú, es escenario actual de conflictos sociales, generados por la expansión de la actividad minera en las cabeceras de cuenca y la defensa que ejerce la población de sus derechos a la tierra y el agua.

editorial



En los últimos años se extiende por Asia, África y América Latina la adquisición de enormes extensiones de tierras, llevada a cabo por grandes empresas –extranjeras y también de los países en lo que se adquieren las tierras, inversionistas institucionales y especuladores e incluso estados–. Como se explica en el artículo que abre esta edición de **LEISA** (Monsalve Suárez y Seufert, p. 5), las razones de estas operaciones, que pueden otorgar tierras en venta, alquiler, concesión, etc., son varias: producción de biocombustibles (especialmente etanol a partir de maíz o caña de azúcar), de alimentos (principalmente soya transgénica), inversión especulativa, explotación minera, petrolífera o de gas natural.

La apropiación de grandes extensiones de tierras por grupos de poder y la lucha de los pequeños propietarios, productores campesinos y poblaciones indígenas en defensa de sus derechos no son nuevos, sino que se han dado frecuentemente a lo largo de la historia. Pero esta reciente oleada de acaparamiento de tierras se justifica con nuevos argumentos. Uno de ellos es que la apropiación de grandes extensiones para la producción de biocombustibles se defiende recurriendo a la problemática del cambio climático, cuando, como se sabe, el tipo de agricultura industrial que se va a desarrollar en estas áreas implica la producción de gases invernadero. También, a menudo se sostiene en nuestros países que no se debe poner límite a la extensión de las unidades agrícolas puesto que con la agricultura a gran escala se obtienen los rendimientos más altos, que serían imprescindibles para poder alimentar a la población en crecimiento. Pero no se dice que ese tipo de agricultura contamina el medio ambiente y elimina la agrobiodiversidad y, aun cuando fuera más productiva que otras alternativas –lo cual tampoco está demostrado–, no es sostenible.

Otro aspecto que los defensores del acaparamiento de tierras no mencionan es que la instalación de grandes propiedades, por lo general en regiones pobres y de escaso desarrollo institucional, otorga a los nuevos terratenientes gran poder e influencia en las decisiones políticas, incluso a nivel nacional y que, el nuevo proceso de concentración de tierras se impone sobre niveles preexistentes de desigualdad, que demandan políticas redistributivas en lugar de limitar el acceso a la tierra a la población rural (Mauro: p. 9).

Aquí es también importante señalar que, en el contexto actual, la defensa de la tierra y el territorio incluye los recursos naturales y el acceso a ellos por las poblaciones que se sienten amenazadas o que ya están sufriendo los impactos de la pérdida de las condiciones de vida y el acceso a elementos vitales, como son: el agua de calidad para el consumo humano y la producción agraria o la conservación de la fertilidad natural de los ecosistemas por la disminución compulsiva de la biodiversidad. En América Latina, los países donde la defensa por la tierra y el territorio toma, hoy en día, mayor relevancia, es en aquellos donde el crecimiento económico es mayor, dado el grado de inversión en industrias extractivas (minería, petróleo, madera) cuya tributación al fisco aporta un importante porcentaje del PBI.

Terminamos recalcando que, como el título de esta edición de **LEISA** indica, el actual acaparamiento de tierras desconoce los derechos de los campesinos, los pequeños productores y las poblaciones indígenas, que no tienen participación en las decisiones que afectan sus medios de vida y su cultura, y son desplazados de sus tierras y territorios. Por eso se requiere que las poblaciones afectadas se organicen para hacer valer sus derechos, con la colaboración de otras organizaciones de la sociedad civil, en el marco de las instituciones de la democracia y los derechos humanos.



El acaparamiento de tierras y de recursos naturales: violaciones del derecho a una alimentación adecuada

Manifestación en defensa de la tierra en Dakar, Senegal
Foto: autor

SOFÍA MONSALVE SUÁREZ Y PHILIP SEUFERT

“En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.”
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 1.

La falta de acceso adecuado y seguro a la tierra y a los recursos naturales a la que está expuesta la población pobre de las zonas rurales y urbanas, es una de las principales causas del hambre y la pobreza en el mundo. En los 25 años de su existencia, la organización FIAN (FoodFirst Information and Action Network) ha registrado más de 500 casos de violaciones del derecho a una alimentación adecuada. El 80% de estos casos está relacionado con la falta de acceso a recursos. En vista de ello, garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra y del acceso a los recursos naturales es un asunto que debe ser abordado urgentemente, para asegurar los medios de subsistencia de las poblaciones rurales y urbanas.

Sin embargo, las enormes desigualdades en la distribución de la propiedad de la tierra –desde América Latina hasta África austral, pasando por el Sudeste asiático– continúan siendo un motivo de profunda preocupación. De igual forma, en las zonas rurales se puede observar una tendencia hacia la reconcentración de la tenencia de la tierra y la reversión de los procesos redistributivos impulsados en el marco de las reformas agrarias.

¿Qué es el acaparamiento de tierras?

Los conflictos agrarios y las luchas para mantener u obtener acceso a y control sobre la tierra no son fenómenos nuevos en África, Asia y América Latina. Desde hace mucho tiempo, campesinos, pastores y pueblos indígenas han visto sus tierras pasar a manos de actores poderosos, sobre todo de sus gobiernos, elites nacionales o inversionistas empresariales. En este sentido, el acaparamiento de tierras no es algo nuevo sino que representa un fenómeno recurrente en la historia humana.

El acaparamiento de tierras comenzó a intensificarse en muchos países durante los últimos diez a quince años con la adopción de las políticas de desregulación, los acuerdos de comercio e inversión, y las reformas de mercado de políticas marco. Las recientes crisis alimentaria y financiera, aumentaron el ímpetu de esta oleada de inversiones en tierras agrarias por parte de gobiernos e inversionistas comerciales. De hecho, desde hace más o menos tres años ha surgido una nueva forma de acaparamiento de tierras: inversionistas públicos o privados toman control de grandes superficies de tierras fértiles destinadas a la producción agrícola; algo que afecta especialmente a los países más pobres, pero también a otros.

Diferentes factores explican el aumento del acaparamiento de tierras en los últimos años. La presión creciente para producir agrocombustibles como alternativas a las energías fósiles está creando una demanda artificial sin precedente

en los cultivos comerciales (Anseeuw y otros, 2012). Varios países dependientes de la importación de alimentos intentan externalizar su producción adquiriendo tierras de cultivo en otros países, con el fin de garantizar su seguridad alimentaria. También, como consecuencia de la reciente crisis financiera, inversionistas privados han descubierto en las tierras agrícolas una nueva fuente para obtener beneficios.

Se desconoce la magnitud exacta del actual acaparamiento de tierras y no es fácil de conseguir detalles sobre los varios proyectos (GRAIN, 2008). Según una publicación reciente del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición, en los últimos años, entre 50 y 80 millones de hectáreas de buena tierra de cultivo han sido transferidas de los agricultores campesinos a corporaciones (HLPE, 2011). Las empresas implicadas calculan que hasta el momento ya se han comprometido a nivel global unos 25 mil millones de dólares, y hacen alarde de que la cifra se triplicará en un futuro cercano (LDPI y otros, 2011).

Es difícil establecer exactamente la magnitud del acaparamiento de tierras en América Latina. Un análisis del fenómeno hecho por la FAO en 17 países latinoamericanos (FAO, 2011) demuestra que el acaparamiento de tierras ha aumentado en la región en los últimos años, y que su magnitud en cuanto al número de países y la superficie acaparada, es mayor de lo que se suponía. Si se compara la dinámica en América Latina con la de otras partes del mundo, se puede notar que aquí el acaparamiento de tierras tiene algunas características particulares: sobre todo hay que subrayar que las elites nacionales tienen un rol fundamental como inversionistas principales y que gran número de transacciones es realizado por empresas (trans) latinoamericanas (Borras y otros, 2011). Aunque la producción de agrocombustibles es responsable de un gran número de transacciones de tierras, también hay que señalar la importancia de proyectos de minería, de megaproyectos conservacionistas

y de explotaciones forestales industriales. Estas observaciones indican que la manera como se ha entendido hasta ahora el acaparamiento de tierras en la región, es decir, como un proceso de extranjerización de la tierra para proyectos agrícolas, es muy acotada y no corresponde a la realidad.

Acaparamiento de tierras y derechos humanos

Desde su creación en 1986, FIAN ha sido una de las primeras organizaciones en aplicar sistemáticamente un enfoque basado en los derechos humanos a las cuestiones agrarias y el acceso a la tierra. Desde esta perspectiva, el acaparamiento de tierras representa una amenaza para los derechos humanos de las poblaciones locales.

En primer lugar, el acaparamiento de tierras amenaza al derecho a una alimentación adecuada, garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este derecho ha sido definido por el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en su Observación General 12, como el derecho que se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla, lo cual incluye el acceso a los recursos necesarios para ello (CDESC, 1999). El acaparamiento agrario impide que vastas extensiones de tierra y los recursos hídricos asociados –en el suelo, subsuelo y circundantes– puedan ser utilizados ahora y en el futuro por indígenas, campesinos, pastores, pescadores artesanales y poblaciones nómades, lo que de facto es una privación de estos recursos para la población local.

Internacionalmente, el acaparamiento de tierras implica violación de derechos humanos, debido a que este se lleva a cabo expulsando a las comunidades locales, silenciando y reprimiendo a quienes se oponen, intensificando la aplicación

Alambrada. Ccascabamba, Angaraes
Foto: Archivos SISAY



de modelos no sostenibles de agricultura y de uso del suelo que destruyen los ambientes naturales y agotan los recursos; negando el acceso a la información completa y evitando así la participación de las comunidades en las decisiones que afectan profundamente sus modos de vida. FIAN y otras organizaciones de derechos humanos han documentado un gran número de desalojos forzosos de comunidades rurales y urbanas a lo largo de los últimos años.

En suma, el acaparamiento de tierras constituye una violación de los derechos humanos y plantea numerosas amenazas para las comunidades rurales. Al ser una actividad a largo plazo que destruye los ecosistemas y va en contra de opciones de política rural basadas en los derechos humanos, como la reforma agraria, también puede vulnerar los derechos humanos de las generaciones futuras.

La responsabilidad de los gobiernos y de las organizaciones internacionales

Las acciones y decisiones que ignoran las obligaciones que tienen los gobiernos de garantizar los derechos humanos, se encuentran entre las principales causas por las cuales el hambre no solamente persiste, sino que incluso sigue aumentando a nivel mundial. En lugar de facilitar a los inversionistas nacionales o extranjeros el acceso a inmensas superficies de tierras, los gobiernos deben suspender de inmediato todos los acaparamientos de tierra actuales y futuros; rescindir los contratos ya firmados, devolver la tierra saqueada y sancionar el acaparamiento de tierras. Además, los gobiernos deben honrar los compromisos asumidos en la declaración final de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR), de 2006, relacionados con el fortalecimiento de la agricultura campesina sostenible, así como implementar las recomendaciones de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia

y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), de 2008. Los gobiernos deben también dejar de reprimir y de criminalizar a quienes defienden sus tierras.

Al mismo tiempo, las organizaciones internacionales deben reconocer las desastrosas consecuencias del acaparamiento de tierras para las comunidades, los ecosistemas y el clima, en vez de tratar de legitimarlos dándoles una fachada de 'inversiones responsables'. Si bien se necesitan urgentemente inversiones en las zonas rurales, este tipo de inversión produce lo contrario a lo que verdaderamente hace falta, es decir: inversiones en las comunidades locales y en la agricultura a pequeña escala.

Con el acaparamiento de tierras, la globalización llega a los sectores clave de las economías nacionales y de sectores esenciales para la libre determinación de los países y de los pueblos. El acaparamiento agrario profundiza la mercantilización de los recursos naturales y de la agricultura. El sistema alimentario resultante amenaza de forma sistemática la realización del derecho a la alimentación de las familias campesinas, pero también de todo el resto de la población. Por eso, todos tenemos el deber de enfrentar y oponernos al acaparamiento de tierras, seguir luchando por la reforma agraria y por el derecho a la tierra y el territorio. Durante el Foro Social Mundial de Dakar, Senegal, en febrero de 2011, movimientos sociales, organizaciones de pequeños productores y otras organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamamiento colectivo contra el acaparamiento de tierras (www.dakarappeal.org). Más de 900 organizaciones ya se han adherido a este llamamiento que se ha convertido en una de las principales herramientas para la resistencia contra el acaparamiento de tierras. Además, ha sido creada una Alianza Mundial contra el Acaparamiento de Tierras durante la primera Conferencia Internacional de Campesinos contra el Acaparamiento de Tierras, en Nyéléni, Malí, en noviem-

El caso Bajo Aguán, Honduras

El sector agropecuario en Honduras contribuye entre el 26 y el 28% al Producto Interno Bruto (PIB) y más de un tercio de su territorio está constituido por tierras cultivables y pastizales. Pese a esa gran disponibilidad de tierra, gran cantidad de familias continúa sin tener acceso a la tierra y miles de ellas poseen apenas entre 1 y 3,5 hectáreas, mientras existe una gran concentración de tierras en manos de propietarios particulares. Esta situación incrementa los niveles de pobreza y pobreza extrema de un país enormemente rico en recursos naturales (FIAN, 2011).

La reducción de la soberanía y seguridad alimentarias en Honduras está acompañada por un proceso de reconcentración de las mejores tierras del país en pocas manos, lo cual ha hecho retroceder los avances logrados en materia de redistribución de tierras a partir de los años setenta. El proceso de reforma agraria tuvo su auge entre 1973 y 1977, cuando se distribuyeron 120 mil hectáreas en solo cinco años.

Fue en esa época que el Estado comenzó a promover un programa de migración inducida para trasladar campesinos a zonas despobladas del Atlántico hondureño, sobre todo en la región del Bajo Aguán.

Sin embargo, en el marco de los Acuerdos de Ajustes Estructurales impulsados por los organismos financieros internacionales, se promulgó en 1992 la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, con la que los empresarios continuaron la concentración de la tierra. A través de diversos manejos irregulares y diferentes interpretaciones de esa ley, se otorgó a los grandes productores la oportunidad de extender sus territorios más allá de los límites máximos de propiedad que la ley de reforma agraria había establecido; en otras palabras, se les permitió acaparar tierra.

Para los campesinos sin tierra y minifundistas se perdía así la esperanza de acceder a tierra productiva en cantidad

y calidad suficiente que les permitiera convertirse en productores por cuenta propia. Ante esta situación, a partir de 2001, miles de familias campesinas empezaron a ocupar pacíficamente tierras que reivindicaban como propias.

El 9 de diciembre de 2009, 2.500 familias campesinas del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) iniciaron un proceso de recuperación de 20 mil hectáreas. Esta situación desencadenó una ola de violencia y represión en todo el Bajo Aguán que se ha visto fuertemente agudizada desde el golpe de estado el 28 de junio de 2009. Los movimientos campesinos de esta zona, que luchan por el acceso a la tierra para ejercer su derecho a alimentarse, se han enfrentado a una situación de permanente hostigamiento y atropello tanto de parte de las fuerzas de seguridad pública como de miembros de empresas de seguridad privada. Entre enero de 2010 y febrero de 2012, han sido registradas 45 muertes en relación con el conflicto por la tierra en el Bajo Aguán.

bre de 2011 (www.cloc-viacampesina.net/es/temas-principales/reforma-agraria/803-declaracion-de-la-conferencia-idetengamos-el-acaparamiento-de-tierras-ya). La defensa de un acceso justo a la tierra y a los recursos naturales es un elemento clave en la lucha por el derecho a la alimentación y representa la base de una agricultura sostenible basada en la soberanía alimentaria y la justicia. ■

Sofía Monsalve Suárez

Coordinadora Programa Acceso a Recursos Naturales
Correo-e: monsalve@fian.org

Philip Seufert

Programa Acceso a Recursos Naturales - FIAN International Secretariat
Correo-e: seufert@fian.org

Referencias

- Anseeuw, Ward; Liz Alden Wily, Lorenzo Cotula y Michael Taylor. 2012. **Los derechos a la tierra y la fiebre por ella** (en línea, consultado en enero de 2012). International Land Coalition (ILC). http://www.landcoalition.org/sites/default/files/publication/1205/GSR%20summary_ESP.pdf (resumen en español), http://www.landcoalition.org/sites/default/files/publication/1205/ILC%20GSR%20report_ENG.pdf (informe completo en inglés).
- Borrás Jr., Saturnino M.; Jennifer C. Franco, Cristóbal Kay y Max Spoor. 2011. **El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia** (consultado octubre 20, 2011). <http://www.tni.org/es/report/el-acaparamiento-de-tierras-en-america-latina-y-el-caribe-visto-desde-una-perspectiva>
- Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). 1999. **El derecho a una alimentación adecuada**. Observación general No. 12. Disponible en <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/420/15/PDF/G9942015.pdf?OpenElement>
- FAO, 2011, **Dinámica del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe**. Santiago. Disponible en <http://www.rlc.fao.org/fileadmin/content/events/semtierras/acaparamiento.pdf>
- FIAN. 2011. **Honduras: Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán**. Informe de la Misión de Verificación Internacional (en línea, consultado en julio de 2011). Disponible en <http://www.fian.org/recursos/publicaciones/documentos/honduras-violaciones-de-derechos-humanos-en-el-bajo-aguan-1/pdf>
- GRAIN. 2008. **Farmlandgrab.org** Disponible en <http://farmlandgrab.org/>
- Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLPE). 2011. **Tenencia de la tierra y las inversiones internacionales en agricultura** (en línea, consultado en julio, 2011). Disponible en http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE-Informe-2-Tenencia-de-la-tierra-e-inversiones-Julio-2011.pdf
- International Land Coalition (ILC) (sin fecha). **Presiones comerciales sobre la tierra** (en línea). Disponible en <http://www.commercialpressuresonland.org>
- Land Deal Politics Initiatives (LDPI), Instituto de Estudios sobre Desarrollo (IDS), y *Revista de estudios campesinos*. 2011. **Documentación del Encuentro sobre Acaparamiento de Tierras** (en línea). Sussex, Inglaterra. Disponible en <http://www.future-agricultures.org>

“Nuestra tierra no está en venta”. Campesinos de FoEI, aliados de La Vía Campesina, protestan en las calles de Durban, Sudáfrica, contra el modelo de agricultura industrial
Foto: Friends of the Earth International





Delfina, una mujer wichí, en su huerto, comunidad La Fontana, Chaco, Salta, Argentina
Foto: Ciara Scardozi

Escasez de tierra y perspectivas futuras

ANNALISA MAURO

El problema de acaparamiento o concentración de tierra es un proceso rápido y alarmante que trae beneficios a gran escala y se inserta en cadenas productivas comerciales, no tanto en el nivel doméstico sino en el regional o internacional.

En el contexto de presión sobre la tierra para producir energía, combustibles y minerales; secuestrar carbono, proteger la naturaleza, alimentar, ser un espacio de vida digna, acomodar derechos originarios y derechos recientes; todo esto para una población creciente y con mayores demandas, las adquisiciones de tierras dibujan en el mapa los flujos de

capital. En ocasiones, los procesos de adquisición de tierra traspasan las fronteras nacionales, generando impactos que dan lugar a nuevas interacciones entre los países de la región. Es fundamental generar información y vigilar tendencias a través de los 'observatorios' de tierra y territorios. Cada observatorio genera la información y la evidencia necesarias para interactuar con los tomadores de decisiones e influenciar sus políticas.

Desde la perspectiva ambiental, destaca el cambio de uso del suelo propio de los procesos de concentración y su impacto en el paisaje rural, ambiental y social. En este sentido, impresiona el impacto de la producción de soya en Paraguay o de palma africana en Guatemala, que trazan paisajes uniformes, privados y carentes de biodiversidad. Los contratos de transacciones de tierra, no siempre transparentes y accesibles, tienen que vincular, además, el acceso a la tierra con el consumo de agua. Grandes adquisiciones de tierra implican muchas veces la necesidad de grandes cantidades de agua, desatándose problemas en el acceso a este otro recurso.

Es necesario avanzar también en la investigación sobre el impacto de los procesos de concentración de tierra sobre las mujeres rurales. Según la FAO, si se garantizara a las mujeres el acceso equitativo a los recursos, su rendimiento agrícola podría incrementarse entre 20% y 40%, lo que aumentaría los rendimientos nacionales hasta en 4%. "En el proceso de privatización de la tierra, las mujeres pierden los pocos derechos que ya tenían, mientras que los hombres fortalecen los suyos. Cuando se formaliza la privatización son los hombres quienes reciben títulos" (Lastarria-Cornhiel, 2011).

El proceso de concentración de tierra en la región se suma en algunos casos a niveles históricos preexistentes de concentración y desigualdad, a los cuales se tendría que responder con políticas redistributivas antes de facilitar cualquier iniciativa de inversiones de gran escala que limitan el acceso a la tierra para la población rural que la demanda.

¿Cómo asignar derechos y deberes sobre un recurso limitado como la tierra, para distintos grupos con demandas contrastantes?

Se abre en la región un debate sobre una nueva generación de políticas (Bolivia, Argentina, Ecuador, Perú) capaces de redefinir el significado mismo de tierra. En este debate se considera a la tierra no como un problema aislado, sino como un espacio donde convergen distintas presiones y limitaciones en un territorio. Estas políticas apuntan a ordenar el territorio para reconocer y responder a los derechos de poblaciones diferenciadas (pueblos indígenas, mujeres rurales, adolescentes agrarios, consumidores de alimentos, etc.). Tales políticas deben ser articuladas por el Estado y facilitar, como condición imprescindible, la participación ciudadana para su legitimización social. Los ciudadanos y ciudadanas deben participar activamente y ejercer sus derechos sobre las decisiones que afectan sus territorios rurales. Una nueva institucionalidad agraria puede resultar de una interacción Estado-sociedad. Las políticas deben anticipar el fenómeno de acaparamiento a través de medidas preventivas como límites a la propiedad y a la extranjerización de la tierra; considerar impuestos progresivos; tomar en cuenta el respeto de la vocación del suelo para limitar procesos de avance de la frontera agrícola o del cambio de uso del suelo.

A nivel global, en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO, se negocian actualmente las Directrices Voluntarias sobre Gobernanza Responsable en la Tenencia de la Tierra y Otros Recursos Naturales. De ser aprobadas, estas directrices ofrecerán un marco de referencia para el avance de políticas nacionales.

Como destacan los relatores de las Naciones Unidas, la violación de los derechos humanos está estrechamente vinculada a las reivindicaciones y defensa de la tierra y territorios. Es necesario destacar los despojos que suceden en la

región y trabajar en la defensa de los derechos individuales y colectivos de indígenas y campesinos.

A pesar de la tendencia a favorecer las grandes inversiones de capital, la propiedad de grandes extensiones de tierra y el libre comercio, la mayoría de los marcos legales de la región ofrecen importantes contextos para la exigibilidad del derecho a la tierra. Muchas organizaciones locales encuentran soluciones locales a través de procesos de diálogo entre actores o a través de negociaciones con actores externos, como medio para establecer consensos sobre el acceso, uso y control de los recursos. ■

Annalisa Mauro

International Land Coalition Secretariat

Correo-e: l.mauro@landcoalition.org

Referencias

- Borras Jr., Saturnino M. y Jennifer Franco. 2008. **Citizens Building Responsive States**. Institute of Development Studies. University of Sussex Brighton BN1 9RE UK.
- FAO. 2011. **Directrices Voluntarias para una Gobernanza Responsable en la Tenencia de la Tierra y Otros Recursos Naturales**. Disponible en <http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/es/>
- International Land Coalition (ILC). 2011. **La concentración de la propiedad de la tierra en América Latina: una aproximación a la problemática actual**. Serie Presiones Comerciales sobre la Tierra. ILC, CISEPA, CIRAD.
- Lastarria-Cornhiel, Susana. 2011. **Tierra de Mujeres. Reflexiones sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra en América Latina** (en línea). ILC, Fundación Tierra. Disponible en http://americalatina.landcoalition.org/sites/default/files/ILC_FT_Tierra%20de%20mujeres.pdf
- Naciones Unidas. 2008. **Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas**. Nueva York. Disponible en http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A-HRC-18-26_sp.pdf
- PNUD. 2011. **Informe Desarrollo Humano Colombia**. (en línea). Disponible en <http://pnudcolombia.org/indh2011>



Trabajando en tierra propia
Foto: Sandra Apaza

Los territorios kechwa-lamas y la superposición de sus modos ancestrales de relacionarse con la tierra

RIDER PANDURO MELÉNDEZ

Los kechwa se asientan en la amazonía, y dependen principalmente de la horticultura de roza y quema, aunque la caza y la pesca aún son importantes. Las zonas de caza o 'paseaderos', para el *mitayero* –cazador amazónico– se ubicaban en las nacientes de las microcuencas que fluyen hacia las cuencas medias y bajas de ríos como el Marañón, el Huallaga, el Mayo y el Ucayali.

Entre los espacios de caza y sus chacras regeneraban la diversidad de sus cultivos nativos a través del intercambio con los bosques. Las migraciones y los procesos de cultivo entre la chacra y el bosque les permitieron ampliar sus relaciones con otras poblaciones amazónicas y andinas, así como la regeneración de rituales ancestrales relacionados con el bosque y la caza, que perduran hasta hoy en muchos de sus ceremoniales agrofestivos.

Las zonas de caza funcionaban también como centros de enseñanza sobre la biodiversidad regional para los niños acompañantes del mitayo. Así, los saberes se transmitían a los jóvenes en su proceso de conversión en mitayeros, y se fortalecía su organicidad ancestral manifiesta en la comunidad o *llaktaa*. No había límites entre regiones, todo estaba entrelazado formando el *pacha* o tejido, hecho de caminos entre las comunidades, las familias, las chacras y el monte. En las pachas se manifiesta la biodiversidad y la interdependencia de las colectividades naturales con los runas y las deidades.

En la actualidad, algunas de estas antiguas zonas de caza se han convertido en áreas comunales otorgadas por los gobiernos. Existen 15 comunidades con áreas comunales reconocidas, pero hay más de 100 comunidades con poblaciones nativas kechwa distribuidas en 7 provincias. Las zonas de caza y las áreas comunales se encuentran superpuestas con una serie de concesiones otorgadas a corporaciones de hidrocarburos, industrias forestales, agroindustrias, áreas de conservación y zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. A esto se suman oleadas de inmigrantes que están formando nuevas comunidades.



Trabajo colectivo de mantenimiento de caminos y linderos para prevenir la invasión de territorios
Foto: autor

La superposición de territorios no es solo física, sino que implica cosmovisiones, y formas de relacionarse con la tierra. El modo de vida de los kechwa-lamas expresa la simbiosis de la colectividad natural constituida por la relación hombre-naturaleza-deidad. Se trata de una relación vivencial, filial y de respeto por la madre naturaleza o *pachamama*: la *yacumama* (el agua como madre) y la *sachamama* (el bosque como madre), que permite la recreación de la diversidad biocultural.

Entre las aspiraciones de los pueblos kechwa-lamas, expresadas en las conclusiones de una reunión regional con representantes de 30 comunidades (ARAA/CHOBA-CHOBA, 2003), y relacionadas con sus espacios de vida comunal regional, mencionaron:

- La necesidad de que el Estado facilite la titulación de tierras y áreas comunales.
- Que los gobiernos apoyen a las comunidades en la recuperación y conservación de cultivos nativos y bosques, mediante el fortalecimiento de la chacra tradicional, la sabiduría vinculada a las prácticas y el reconocimiento de áreas comunales ancestrales.

- Contar con apoyo para el análisis de las concesiones forestales y las posibles exploraciones petroleras.
- Cualquier apoyo, proyecto, acción o decisión de las organizaciones e instituciones oficiales que afecte a las comunidades kechwa hablantes debe facilitar encuentros regionales para fortalecer la organización en su conjunto y no por separado.
- Promover la formación de un consejo de mayores (o abuelos y abuelas) como instancia mayor de decisión.

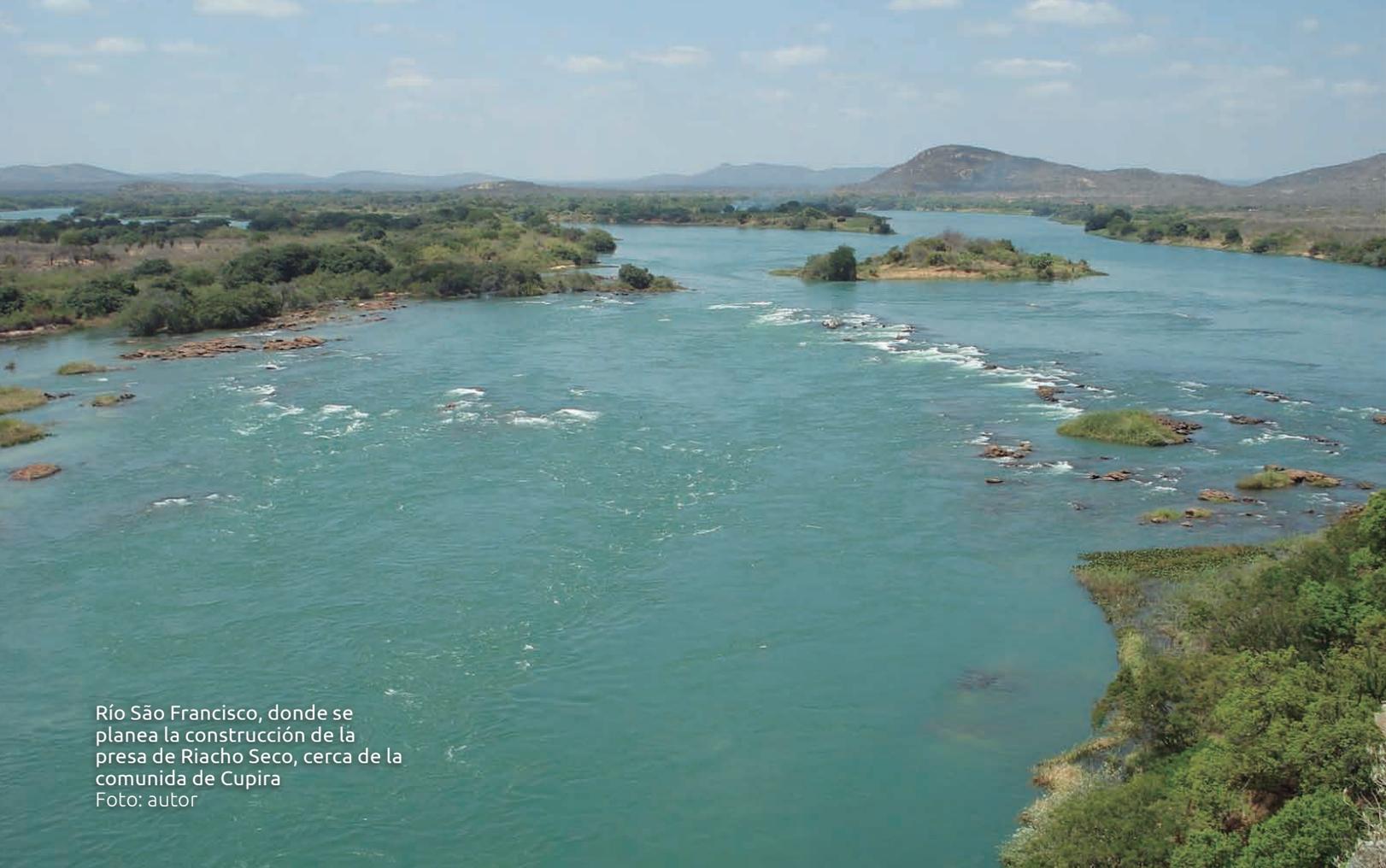
El mundo oficial debe respetar sus creencias, vida comunal y aspiraciones. Los mayores enseñan a compartir la sabiduría y las semillas, equivalencia que los kechwa-lamas esperan del mundo moderno.

Rider Panduro Meléndez

Correo-e: riderpm60@gmail.com

Referencia

- Mayor, Pedro, y Richard Bodmer. 2009. **Pueblos indígenas de la Amazonía peruana** (en línea). Iquitos, Perú. Disponible en <http://atlasanatomiaamazonia.uab.cat/pdfs/PueblosIndigenasAmazoniaPeruana.pdf>.



Río São Francisco, donde se planea la construcción de la presa de Riacho Seco, cerca de la comunidad de Cupira
Foto: autor

La carrera global por el derecho a la tierra y el territorio en Brasil

SÉRGIO SAUER

12 Según un estudio realizado por el Banco Mundial (Deininger y Byerlee, 2010), ha habido un aumento significativo en la demanda mundial de la tierra, especialmente a partir de 2008, por lo que el histórico 'conflicto territorial' en Brasil y América

Latina, forma parte de un fenómeno global. Según este estudio, en comparación con la transferencia de tierras de cultivo (o cultivadas), el aumento fue de aproximadamente cuatro millones de hectáreas anuales antes de 2008. Solo en 2009, más precisamente entre octubre de 2008 y agosto de 2009, se vendieron más de 45 millones de hectáreas, de las cuales el 75% de ellas se encuentran en África (Deininger y Byerlee, 2010, p. vi).

Un hallazgo clave del estudio del Banco Mundial es que el crecimiento de la producción agrícola y, en consecuencia, las demandas y las transacciones para la compra de tierras se concentran en la expansión de ocho productos. Estos son maíz, palma aceitera, arroz, canola, soja, girasol, caña de azúcar y plantaciones forestales (Deininger y Byerlee, 2010, p. 8), y tres de ellos (maíz, soja y caña de azúcar) son fundamentales en la expansión de la frontera agrícola en Brasil, lo cual se refleja en mejores precios para los agrocombustibles y en las subvenciones del gobierno.

Una parte importante de la producción agrícola está directamente relacionada con la creciente demanda mundial de fuentes de energía alternativas y el consiguiente incremento de la producción de materias primas para biocombustibles. Según datos del Ministerio de Agricultura, la mitad de la cosecha anual de caña de azúcar brasileña es para la producción de etanol y, alrededor del 90% de la producción nacional de biodiesel tiene al aceite de soja como materia prima básica.

Debido a la creciente demanda la tendencia es a aumentar las superficies plantadas de materias primas para la agroenergía. En 2008, de la superficie total cultivada en el mundo, se calculó que 36 millones de hectáreas, son para biocombustibles; un área dos veces mayor que en el año 2004. De estas, 8,3 millones de hectáreas estaban en Europa



Canal de trasposición, trecho que afecta el área del asentamiento
Jibóia, municipio de Cabrobó
Foto: autor

(principalmente con canola), 7,5 millones en los EE.UU. (con maíz) y 6,4 millones de hectáreas en América Latina (Deininger y Byerlee, 2010, p. 8), principalmente con plantaciones de caña de azúcar en Brasil. Según este estudio del Banco Mundial, ahora existen tres tipos de reclamantes de tierras: a) los gobiernos interesados en la producción de alimentos para atender la demanda interna de sus poblaciones; b) las empresas financieras que en la situación actual buscan ventajas comparativas mediante la adquisición de tierras, y c) las empresas agroindustriales y de agronegocios que, debido a la alta concentración del comercio y del procesamiento, buscan expandir sus negocios (Deininger y Byerlee, 2010, p. 3).

Este proceso de expansión de las actividades agrícolas es contradictorio, porque si por un lado reproduce la lógica colonial, 'acumulación por desposesión', según Harvey (2004); por el otro, cuenta con apoyo del gobierno. Una parte importante de la inversión extranjera en Brasil, incluyendo la compra de tierras, se financia con fondos públicos. Las inversiones y los incentivos fiscales (Sauer, 2010) se asignan principalmente al cultivo de caña para la producción de etanol (en el Cerrado de Goiás, Mato Grosso do Sul y el Triángulo Mineiro) y para el cultivo de soja en la región conocida como 'Mapitoba' (área de 414.381 km² que ocupa parte de los estados de Maranhao, Tocantins, Piauí y Bahía) y también en partes de la amazonía. Así mismo, se destinan fondos públicos para la minería y extracción de madera, principalmente del bosque amazónico. De otro lado, muchos proyectos de infraestructura realizados con fondos públicos no han respetado los derechos territoriales de las comunidades tradicionales, como tampoco el de las familias beneficiarias de los programas de reforma agraria.

El interés internacional en la tierra y en las materias primas, así como la expansión de la frontera agrícola y la exploración minera siguen afectando a las comunidades rurales, especialmente a las de los quilombos, como veremos más adelante.

La intensificación de los conflictos territoriales en el semiárido

Como se mencionó anteriormente, las disputas por la tierra y el territorio no son nada nuevo en la historia de Brasil; por el contrario, la expropiación y la acumulación de tierras han sido siempre el sustento del ejercicio del poder político y de la implementación de procesos de desarrollo, como fue el caso de la aplicación de la Revolución Verde a partir del año 1960. Este proceso histórico de apropiación y expropiación ha permitido el mantenimiento y la expansión de un modelo de producción agroexportador (modernización conservadora), que prioriza el mercado internacional de *commodities*.

Frente a la concentración de la tierra, existen la resistencia y la lucha de las comunidades y grupos sociales, como oposición a la expansión del modelo agroexportador y sus pretensiones de ampliación de la frontera agrícola. Los campesinos y agricultores familiares, los pueblos ribereños, los indígenas, comunidades quilombolas y muchos otros grupos sociales del campo que han estado excluidos políticamente buscan reivindicar sus derechos, reconstruir sus identidades y modos de vida, así como sus formas de apropiación de la tierra con diversificación agrícola y la valorización del bosque y la naturaleza, insistiendo en el derecho a la reproducción social y cultural.

Esta es la realidad de muchas comunidades en todo Brasil, no solo en la región amazónica, sino también en el no-



Reunión de la comunidad quilombola Cupira, municipio de Santa Maria da Boa Vista, que será inundada con la construcción de la presa de Riacho Seco (río São Francisco)
Foto: autor

reste, sobre todo como resultado de la inversión pública en construcción de infraestructura.

La Relatoría de Derechos Humanos de Tierra, Territorio y Alimentación, llevó a cabo una misión a la región semiárida de Pernambuco, en 2010. Esta región, marcada por el fracaso de las políticas públicas, sufre los impactos de mega proyectos, tales como los de las represas Barragens de Riacho Seco y Pedra Branca y las obras de transposición del río São Francisco. En una visita a las comunidades afectadas y a los proyectos de colonización, los líderes de la comunidad y de los movimientos sociales expresaron con evidencia las violaciones de sus derechos; era evidente la amenaza por los proyectos de represas que enfrentaba la comunidad Cupira, una agrupación quilombola, ubicada en Santa Maria da Boa Vista.

Los proyectos de 'desarrollo' de la región, financiados con fondos públicos, han servido a los intereses de grandes grupos económicos, tales como el Pontal Sul, proyecto para la irrigación de más de siete mil hectáreas de tierra en el municipio de Petrolina, y posterior venta de grandes lotes a los grupos económicos, sin tomar en cuenta ni satisfacer la demanda de la población local por acceso a la tierra y el agua.

También la demarcación de las tierras indígenas muestra la evidencia de múltiples violaciones de derechos fundamentales de estos pueblos, algo que se debe tanto a la inestabilidad y lentitud de los procedimientos administrativos en curso en la Fundación Nacional del Indio (Funai), como a la presión que ejercen los grandes grupos económicos en la región.

Las acciones de los movimientos sociales y la resistencia de las comunidades tradicionales son vistas como una amenaza, ya que los conflictos generan inestabilidad y 'ahuyentan los negocios', pero también explican el por qué de la disputa por la tierra, lo cual es un factor que limita las oportunidades de expansión para los monocultivos. En esta lógica, los movimientos sociales agrarios, los pueblos y comunidades tradicionales (faxinalenses, quilombolos, quebradoras de coco, vazanteiros, pescadores, etc.), y muchos pueblos indígenas son criminalizados por cuestionar la expansión de la frontera agrícola para el monocultivo.

Apuntes para una conclusión

En agosto de 2010, ante la creciente demanda de tierras en Brasil, la Oficina del Procurador General (Advocacia Geral da União - AGU) ha emitido una opinión que restablece las posibilidades para limitar, o más bien regular los procesos de inversión y compras de terrenos por extranjeros en Brasil. Esta opinión de AGU retoma lo dispuesto en la Ley No. 5.709, creada en 1971, donde se establece el límite máximo de 50 módulos (art. 3) para la compra de tierras por extranjeros y, también, el que la suma máxima de propiedades de una persona extranjera no puede superar la cuarta parte de la extensión de un municipio (art. 12).

Sin menospreciar la importancia de esta opinión legal y judicial, cuyo anuncio causó buena impresión en ciertos circuitos internacionales por mostrar la posibilidad de la acción

efectiva del Estado en un área estratégica, la solución del problema no se materializa con su publicación. Hay problemas en el propio contenido de esta ley que van mucho más allá de la cuestión de la tierra, que convencionalmente se denomina 'extranjerización', 'apropiación de tierras' o 'confiscación de tierras' (traducción de la expresión en inglés *land grabbing*).

La realidad histórica de la concentración de la propiedad de la tierra, corroborada una vez más por el Censo Agropecuario 2006, realizado por el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE), asociada con la falta de reconocimiento de los derechos sobre la tierra, son problemas agrarios graves. Esta situación de concentración y falta de derechos sobre la tierra no será revertida ni asegurada con la adopción de mecanismos para controlar la adquisición de tierras por extranjeros. La inmensa mayoría de los grandes latifundios está en manos de unos cuantos brasileños, lo que hace urgente la adopción de políticas de redistribución y uso de la tierra, como la reforma agraria y el reconocimiento de las tierras pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades tradicionales. ■

Sérgio Sauer

Universidad de Brasilia (FUP/UnB), Relator del Derecho Humano a la Tierra, el Territorio y la Alimentación
Correo-e: sauer.sergio@gmail.com

Referencias

- Deininger, K. y D. Byerlee. 2010. **Rising global interest in farmland: Can it yield sustainable and equitable benefits?** (en línea). Washington, Banco Mundial. Disponible en http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_final.pdf
- Harvey, David. 2004. **O novo imperialismo**. São Paulo, Edições Loyola.

Las organizaciones sociales faxinales están basadas en el uso común de la tierra. El uso es colectivo, pero se trabaja individualmente. En Paraná, la organización de los *faxinais* ha existido desde el siglo XVIII y surgió de una alianza de los indios con los negros que huyeron de la esclavitud. (Fuente REDE PUXIRÃO de Pueblos Tradicionales).

Los quilombolos son una minoría étnica de Brasil que viven en comunidades cerradas, llamadas quilombos. Se remontan a los esclavos (en su mayoría de Angola) de Brasil en el siglo XVII.

Vazanteiros: "pueblos de agua y de la tierra de cultivo", asentados en las riberas de ríos, lagunas y mar del Brasil. (SOS Rios Do Brasil, blog exclusivo sobre recursos hídricos).
sosriosdobrasil@yahoo.com.br

- Sauer, S. 2010. **Dinheiro público para o agronegócio**. *Le Monde Diplomatique Brasil*. Año 3, No. 33, abril de 2010, p. 8-9.
- Sauer, S. 2011. **Mercado de terras: estrangeirização, disputas territoriais e ações governamentais no Brasil**. En: Saquet, M. A.; J. C. Suzuki y G. J. Marafon (orgs.). *Territorialidades e diversidade nos campos e nas cidades latino-americanas e francesas*. São Paulo, Ed. Outras Expressões. 227 p.
- Sauer, S. y S. P. Leite. 2011. **Agrarian structure, foreign investments on land and land price in Brazil** (en línea). Lan Deal Politics Initiative (LDPI). Disponible en www.future-agricultures.org/index.php



Reunión con colonos, líderes quilombolos e indígenas en el asentamiento Jibóia (municipio de Cabrobó), afectado por el canal de transposición
Foto: autor

“Mi territorio es mi vida”

El río Cauca es para la vida y la producción



Modelo de producción sostenible
Foto: Nubia Ciro

ORGANIZACIÓN DE PEQUEÑOS GANADEROS DE ITUANGO, ANTIOQUIA, COLOMBIA, Y NUBIA CIRO

“Recogemos el eco de los territorios de Colombia, ecos de protesta de las personas que habitan los territorios con formas de vida que por siglos se han desarrollado en armonía con el ambiente, pueblos a los cuales se les han violentado sus maneras de habitar, amenazado su cultura e identidad, impuesto el destierro o el desplazamiento, en nombre de lo que algunos llaman desarrollo”.

Ríos Vivos, movimiento colombiano en defensa de los territorios afectados por represas.

Las comunidades de los municipios afectados por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Ituango en Antioquia, Colombia, organizadas en asociaciones de campesinos, mineros artesanales, mujeres, comerciantes, transportadores y propietarios de tierra, y articuladas en el movimiento nacional Ríos Vivos, están defendiendo hoy con su propia vida, frente al Estado y las empresas nacionales y transnacionales, el río Cauca como su territorio, en el cual han construido y tejido relaciones de todo orden ancestralmente.

Este megaproyecto hidroeléctrico, al lado de la concesión de más de 40.000 hectáreas para la explotación de metales preciosos otorgada a multinacionales y el establecimiento de una zona franca, forma parte del paquete diseñado por el gobierno en el marco de las ‘Locomotoras del Desarrollo’, para ‘impulsar económicamente’ las regiones del norte y el occidente de Antioquia.

A nombre de este modelo de desarrollo se modifica la actividad productiva tradicional y los territorios se convierten

en zonas mineras o de turismo, donde las empresas nacionales o extranjeras contratan a la población en forma temporal. Los habitantes pierden la autonomía productiva, los lazos que tienen con el territorio y, especialmente en el caso de las mujeres, se restringen sus labores a actividades económicas marginales. El territorio sufre un profundo reordenamiento. La entrega de millones de hectáreas a las transnacionales mineras, el reemplazo forzado de economías campesinas y la pérdida de soberanía sobre amplios territorios ponen en peligro definitivo nuestra esencia: la tierra, la producción, las relaciones de solidaridad y cooperación construidas históricamente por las comunidades. Los megaproyectos se imponen sobre la visión de desarrollo integral de las comunidades locales, productoras de alimentos que generan más empleos permanentes que las represas, y con alternativas reales de desarrollo sostenible y mejores condiciones de vida.

Según Miller Dussan (profesor de la Universidad Surcolombiana de Neiva y líder de la Asociación de Afectados por el Quimbo), “las empresas hablan de resarcimiento de daños, compensaciones e indemnizaciones. A quienes tienen tierras, por lo general se les ofrecen nuevas tierras que muy pocas veces igualan o superan las condiciones de las que se ven forzados a abandonar; se desconoce como afectados a quienes no son propietarios y, por tanto, no se les ofrece ninguna opción; por ejemplo, arrendatarios, ocupantes, vienes o mayordomos. Quienes viven de lo que el río les proporciona manifiestan que la única manera de compensarlos por la destrucción de los ríos es con otro río, situa-

ción difícil si recordamos que no solo los principales ríos a represar son declarados como de utilidad pública sino también sus afluentes. Puede parecer una posición hostil para las empresas y para quienes impulsan estas políticas, pero es importante situarse en la posición de los afectados para dimensionar realmente la magnitud de las afectaciones y no solo en la posición del actor externo que impone su visión desarrollista desconociendo la cultura local”.

Las represas disminuyen la capacidad productiva de los territorios, vulnerando la seguridad alimentaria y poniendo en riesgo el autoabastecimiento del país en el mediano plazo, en virtud de su cantidad y envergadura.

La mayor parte del territorio colombiano vive los efectos del conflicto armado, que facilitan la construcción de estas represas en tanto las comunidades no pueden organizarse para reclamar sus derechos. Así, los desplazamientos forzados han servido para desocupar estas zonas de interés.

¿Qué desaparece con Hidroituango?

Las tierras que se inundan son, en su mayor parte, riberas de ríos: áreas con alta productividad. Se transforma el paisaje y la vocación agropecuaria, y las áreas resultantes son convertidas, a través de la privatización, en zonas turísticas y mineras donde quienes eran propietarios y productores, ahora proporcionan la mano de obra para los oficios que demanda este tipo de economía, transformando también con ello la cultura y arrasando la tradición, la diversidad y la producción, en suma, la propuesta de desarrollo local.

A lo largo de los 79 km que serán inundados, desaparecerá la actividad ganadera y la producción de una gran variedad de frutales, cultivos de panllevar y maderas nativas. Además, se perderá una porción significativa del bosque

seco existente en el país. Se pondrá en riesgo la producción en las laderas de las montañas, cultivadas históricamente por campesinos, que ya han alcanzado una producción mejorada y diversificada.

Tanto para las comunidades asentadas en la ribera que será inundada, como para las que habitan en las laderas –inquietas por las consecuencias que el embalse traerá para su producción y su modo de vida–, la mayor preocupación es que la empresa constructora del proyecto (Empresas Públicas de Medellín) no contempla la Licencia de Impacto Ambiental los estudios y estrategias necesarios para enfrentar las consecuencias físicas sobre la producción local. Las comunidades no han sido escuchadas por la empresa ni han sido resueltas sus dudas. Por el contrario, la empresa se ha empeñado en desmentir su voz y las ha estigmatizado como terroristas aun cuando existe evidencia científica de que las represas generan cantidades considerables de gas metano, 25 veces más poderoso en términos de calentamiento global que el bióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles.

Ante la violación de los derechos de las comunidades, el Estado se queda inmóvil. Desaparecen los derechos a la vida, a la tierra, a la producción, al territorio, a un ambiente sano. Son daños irreparables pues la producción local y las relaciones construidas ancestralmente no tienen precio; tienen valor porque son fundamentales para la vida. Cada vez se ve más distante la posibilidad de reivindicarlos a través de los planes de manejo ambiental de las empresas, en los que se busca solamente reducir costos.

La construcción del proyecto ha recogido los frutos de la violencia focalizada en la región por más de dos décadas, que ha tenido como consecuencia la expulsión de más de 30 mil campesinos, entre muertos, desaparecidos y desplaza-

Transporte tradicional en el río Cauca
Foto: Nubia Ciro





Ganadería tradicional en la rívera del río Cauca, Finca de Fernando Upegui
Foto: Nubia Ciro

dos, generando la desocupación de extensos territorios y la pérdida de valor de la tierra. A los campesinos que aún habitan estos territorios no les ha ido mejor: les han impuesto en la negociación condiciones desventajosas y arbitrarias, pagando por las tierras precios ínfimos. En cambio, los criterios para negociar con los terratenientes han sido diferentes. Uno de los obstáculos con los que se han encontrado los pequeños propietarios para exigir una negociación justa, ha sido la imposibilidad de acceder a la información, debido a que la empresa hace firmar a los grandes propietarios una cláusula de confidencialidad, prohibiendo socializar con los demás propietarios las condiciones de la negociación.

Otras consecuencias que sufre la región tienen que ver con:

Ruptura del tejido social: desaparecen lazos de comunicación e incluso el territorio. Las familias tienden a desmembrarse en la búsqueda del sustento.

Efectos sobre el apego y el valor cultural de la tierra, que son parte integral de la identidad de los pueblos.

Pérdida de la autonomía local sobre el uso de su suelo: el espíritu de la Constitución nacional se ve menoscabado pues las obras pasan por encima de los procesos de ordenación del territorio que han desarrollado las comunidades locales. Los esquemas y planes ordenamiento territorial son

débiles; corresponden a cada municipio y en ningún caso se han llevado a cabo procedimientos consultivos para su modificación antes de iniciar los proyectos, sino ya durante su construcción.

Entre los impactos sociales más graves está la presión sobre la vida de las mujeres, quienes tienen que enfrentar la descomposición familiar, dado que el padre de familia tiene que migrar en búsqueda de nuevas fuentes de recursos para la familia, y la situación repercute en escenarios de violencia intrafamiliar. El elemento común en cada lugar donde se construye una represa es que las mujeres no son tenidas en cuenta para el resarcimiento de derechos o indemnizaciones.

Los proyectos de desarrollo deben surgir desde los territorios, buscando atender necesidades locales para el buen vivir, y no desde el gobierno nacional hacia los territorios, lo que implica que el desarrollo económico se contraponga y vulnere los planes de vida y progreso de las comunidades afectadas por ellos. ■

Organización de pequeños ganaderos de Ituango, Antioquia, Colombia

Nubia Ciro Zuleta

Correo-e: nubici@yahoo.com

visita: www.leisa-al.org

La tierra y el poder

BERTRAM ZAGEMA

De acuerdo con la campaña CRECE de Oxfam, el sistema mundial de alimentos se ha roto. La apropiación de tierras es síntoma de un sistema que no funciona, lo que se presenta con claridad en **Tierra y poder. El creciente escándalo que rodea la nueva ola de inversiones en tierras**” incluido en el reciente informe de Oxfam.

La inversión internacional juega un papel vital en el desarrollo y la reducción de la pobreza. Puede mejorar el bienestar y crear puestos de trabajo, servicios e infraestructura cuando se gestiona de manera responsable y bajo un marco regulador eficaz. Pero el modelo reciente de inversión en tierras es muy diferente. Cuenta una historia de rápido aumento de presión sobre la tierra, un recurso natural del que depende la seguridad alimentaria de millones de personas que viven en la pobreza. Sin medidas nacionales e internacionales para defender los derechos de estas personas, las inversiones han resultado en el despojo, el engaño, la violación de los derechos humanos y la destrucción de los medios de subsistencia.

En los países no desarrollados, hasta 227 millones de hectáreas –un área del tamaño de Europa occidental– han sido vendidos o arrendados desde 2001, principalmente a inversionistas internacionales. La mayor parte de estas adquisiciones de tierras se ha producido durante los últimos dos años. Este reciente incremento puede explicarse en parte por la crisis de precios de los alimentos en 2007 y 2008, que llevó a inversionistas y gobiernos a poner atención en la agricultura tras décadas de abandono.

Tendencias y controladores

El informe, “La tierra y el poder” de Oxfam, analiza las tendencias y los factores que impulsan la adquisición de tierras a gran escala y examina en detalle cinco apropiaciones de tierras en Uganda, Indonesia, Guatemala, Honduras y Sudán del Sur, buscando ayudar a comprender el impacto de las expropiaciones de tierras para identificar los factores que subyacen en las relaciones entre empresas, comunidades locales y gobiernos, así como examinar el papel de los inversionistas internacionales y los gobiernos de sus países de origen.

Todos los actores de estos procesos enfrentan el fracaso en cuanto al respeto de los derechos humanos, la gestión de la inversión hacia el interés público y las respuestas a una de las tendencias más alarmantes a la que se enfrentan las poblaciones rurales de los países no desarrollados: el respeto al consentimiento libre, previo e informado, que es crucial para la gobernanza de la tierra y esencial en la reducción de la pobreza.

Necesidad de cambio

Los gobiernos nacionales han fracasado en la protección de los derechos e intereses de las comunidades locales y de quienes tienen derechos sobre la tierra. Parece que se han aliado con los inversionistas, dándoles la bienvenida con reducciones en los precios de la tierra y otros incentivos, e incluso ayudándoles a ‘limpiar’ la tierra de gente, en procesos que no son guiados por normas y reglas establecidas. Las comunidades locales pueden encontrar alternativas en determinados mecanismos de denuncia, pero estos parecen ser subutilizados.

En general, la respuesta de la comunidad internacional ante esta devastadora ola de acaparamiento de tierras ha sido débil.

El equilibrio de poder tiene que cambiar a favor de los más afectados por los acuerdos sobre la tierra. El derecho de las comunidades a conocer y decidir debe ser respetado por todos los involucrados.

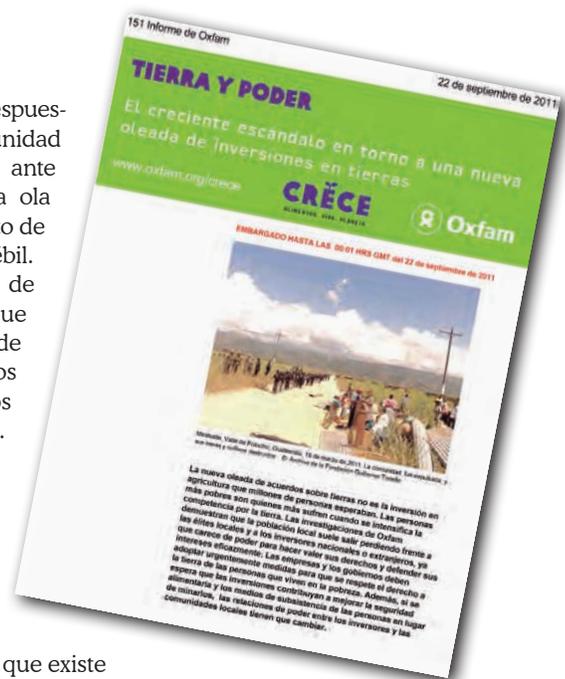
Oxfam concluye que existe un imperativo claro de acción a varios niveles, tanto para asegurar que este cambio estructural se lleve a cabo, como para remediar los conflictos que surgen de estas situaciones. Teniendo en cuenta que la opinión pública puede ejercer presión sobre gobiernos y empresas, y que la sociedad civil, los medios y la academia pueden ayudar a proteger esos derechos y fomentar la transparencia, el informe concluye con las siguientes recomendaciones:

- A nivel internacional, los gobiernos deberían adoptar normas de buen gobierno en relación con la tenencia de la tierra y la gestión de los recursos naturales.
- Los gobiernos de los países anfitriones y las autoridades locales deben promover el acceso equitativo a la tierra y proteger los derechos de las personas.
- Los inversionistas que operen proyectos de agricultura deben respetar todos los derechos sobre las tierras existentes, evitar la transferencia de derechos sobre la tierra lejos de los productores de alimentos a pequeña escala, y llevar a cabo y guiarse por las evaluaciones de impacto social y ambiental.
- Los financistas de las empresas agrícolas y los compradores de productos agrícolas deben asumir la responsabilidad de lo que sucede en sus cadenas de valor.
- Los gobiernos de los países de donde proceden los inversionistas deben asumir la responsabilidad por los actos de las empresas. ■

Bertram Zagema

Asesor político de Oxfam Novib.
Autor del informe **Tierra y poder**.
Correo-e: bertram.zagema@oxfamnovib.nl

Para acceder al informe:
www.oxfam.org/en/grow/policy/land-and-power
Para más información sobre la campaña CRECE:
www.oxfam.org/es/crecer



Agroeco

Entrevista a Roberto Ugás, coordinador general del proyecto

¿Qué significa Agroeco?

Agroeco es el nombre corto del proyecto de investigación “Intensificación Ecológica y Socioeconómica de la Pequeña Agricultura Andina”, que hemos iniciado a comienzos de este año y que va a tener tres años y medio de duración. Estamos bastante contentos porque presentamos el proyecto a una convocatoria internacional para la investigación en seguridad alimentaria del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC), a la que se presentaron más de 200 proyectos de diferentes países y fueron seleccionados 10 ó 12, entre ellos Agroeco.

¿En qué consiste el proyecto Agroeco?

El proyecto está estructurado en cinco componentes. El primer componente, que es el mayor, está enfocado en la gestión de la agrobiodiversidad, tomando dos principales grupos de cultivos, las papas nativas y la horticultura. Tanto en Cajamarca como en Cusco, hemos identificado asociaciones de productores o comunidades campesinas que trabajan con papas nativas y tienen distintos grados de integración al mercado. En horticultura trabajamos el fomento de la producción hortícola a través de mejores semillas o algún tipo de construcciones rurales simples como, por ejemplo, los invernaderos rústicos, para promover una mayor producción y un mayor consumo de hortalizas nativas. Nos interesa enfatizar las hortalizas locales, que sean fáciles de producir, que la gente ya sepa comer, y sobre todo que pueda producir su propia semilla. Y por otro lado, nos interesa, principalmente en Cajamarca pero también en Cusco, trabajar el rubro de frutas pequeñas: el aguaymanto, el sauco, y el pushgay en el caso de Cajamarca. Para Agroeco es importante mejorar la producción, pero en el contexto de la producción familiar y comunal. Ese es el primer componente.

El segundo componente es la gestión de los sistemas de conocimiento. Nos interesa analizar y evaluar cómo hacen los agricultores familiares, y las asociaciones y comunidades campesinas para gestionar los conocimientos locales y los conocimientos modernos que reciben, y cómo las relaciones entre los distintos actores se pueden potenciar para mejorar aspectos productivos, de incidencia política, de conexión con el mercado.

Eso nos lleva al tercer componente que es fundamental para nosotros: el acceso al mercado. Para Agroeco, la comercialización por pequeños productores debe ser fundamentalmente asociativa, a través de la forma de organización social que tengan, por economías de escala y para las negociaciones de precios y las condiciones de comercialización. Pero estas organizaciones campesinas deben ser fortalecidas en comercialización, gestión, seguimiento y evaluación de sus propias acciones, y en mejoras técnicas para organizar la oferta. La organización de la oferta es fundamental en la gestión de las organizaciones campesinas con miras al mercado.



El cuarto componente enfoca el entrenamiento, la extensión y la capacitación. Esperamos implementar un diplomado, un certificado para líderes campesinos en temas de agroecología, agrobiodiversidad, gestión de organizaciones, e incidencia política. Entonces, tanto en Cusco como en Cajamarca estamos seleccionando, junto con las asociaciones y organizaciones de productores, a los líderes campesinos que puedan ser los estudiantes de este diplomado para tener al final del proyecto un buen grupo de por lo menos unos 50 líderes campesinos diplomados por la Universidad Nacional Agraria La Molina, y esperamos que este sea un producto que después podamos aprovechar en distintas actividades en el país, no solo en Cajamarca y en Cusco, por supuesto.

Finalmente, el quinto componente trata de aspectos legales y de incidencia política. Nos interesa mucho trabajar con municipalidades distritales y provinciales, gobiernos regionales, eventualmente el gobierno nacional, brindando información que derive en instrumentos de política para que los propios gobiernos locales puedan volverse garantes y promotores de los mercados que queremos fomentar. Sin una participación activa de los gobiernos locales nos parece imposible que estos mercados se vuelvan sostenibles. Y un aspecto fundamental relacionado con el mercado pero también con la



Agence canadienne de
développement international

Canadian International
Development Agency

IFOAM **IDRC**  **CRDI**



ECOLOGIA
TECNOLOGÍA Y
CULTURA EN
LOS ANDES

LEISA revista de
agroecología



el huerto 



Agroeco es un proyecto de investigación-acción con familias campesinas en Cusco y Cajamarca. Los socios principales del proyecto son la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la Universidad de Columbia Británica en Canadá, y existen tres organizaciones asociadas que son la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, la Asociación ETC Andes que edita **LEISA revista de agroecología**, y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM). El proyecto se inscribe en un programa de seguridad alimentaria del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y trata de intensificar la producción campesina en distintos aspectos, mejorando las condiciones productivas, y también la calidad del trabajo de las organizaciones y de la incidencia política y el acceso a los mercados, para que de esta manera a través de una mayor disponibilidad y acceso y de un mejor uso de los alimentos podamos garantizar mejores condiciones de seguridad alimentaria y nutrición.



Roberto Ugás
Foto: Rafael Nova

incidencia política son los Sistemas Participativos de Garantía (SGP). Así, de la mano con el seguimiento y evaluación en las organizaciones campesinas, se irá manejando el SGP, con involucramiento del gobierno local. Y, de ser posible, incluso con un financiamiento del gobierno local para el funcionamiento del SGP, mucho más cercano a la realidad del pequeño productor latinoamericano y que ya es aceptado legalmente en varios países de la región.

¿Se busca reducir la pobreza con el proyecto Agroeco?

La disminución de la pobreza y la inclusión social son aspectos fundamentales de este proyecto. Y, esperamos que el proyecto pueda contribuir con información y evidencias que apunten a que los distintos aspectos de esta intensificación productiva mejoren los servicios ecosistémicos –los servicios que presta la agricultura campesina a la conservación de la biodiversidad y a la gestión del territorio–, y los haga ser conocidos por el gran público. Esperamos que las evidencias nos lleven a mostrar a los que toman las decisiones a nivel nacional o regional, que esto es posible. El acceso cada vez mayor y en mejores condiciones de las organizaciones campesinas a mercados locales, regionales,

nacionales, y eventualmente internacionales, es una de las principales maneras que vemos de lograr mejoras en la inclusión social y en la reducción de los niveles de pobreza. Creemos que un mayor y mejor acceso a los mercados puede ser una vía muy importante de fortalecer las condiciones de seguridad alimentaria de las familias campesinas.

¿Cómo espera el proyecto Agroeco aumentar la seguridad alimentaria?

En primer lugar, lograr una mayor producción familiar de alimentos más diversificada que contribuya a mejorar la nutrición. Por otro lado, un mayor acceso a alimentos a través de las compras de productos. Las familias campesinas del Perú necesitan adquirir productos que la chacra no produce o que no produce en cantidades suficientes. Entonces, a través de un aumento en los ingresos de las familias esperamos registrar también mayor gasto en compras de alimentos nutricionalmente favorables. Y en tercer lugar, junto con el Instituto de Investigación Nutricional, la Sociedad Peruana de Gastronomía y otros actores en el Perú, trataremos el consumo de los alimentos, analizando aspectos de la gastronomía campesina. ¿Qué comen las familias campesinas? ¿Cómo preparan sus alimentos? ¿Y cómo podemos mejorar las formas de preparación y de conservación de los alimentos para que sean nutricionalmente más favorables y que se puedan conservar por un mayor tiempo?

Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria en el proyecto creemos que es una manera de asegurar, mediante la intensificación que hemos mencionado, que cada vez más las familias campesinas y sobre todo las mujeres y los niños, tengan mejores condiciones sociales. Eso va de la mano con la capacitación, con la incidencia política, pero también con el desarrollo del ejercicio de la ciudadanía por los campesinos. Y uno de los aspectos de ciudadanía que queremos desarrollar más es que los campesinos entiendan su papel como consumidores, y por eso estamos también trabajando acciones de capacitación con la Asociación Peruana de Consumidores y con otras organizaciones. ■



Efectos de la crecida del río
Foto: autor

La lucha por ser reconocidos y no perder la tierra

MATÍAS GARCÍA RODRÍGUEZ

El departamento Orán, en el norte de la provincia de Salta, es una zona con más del 40% de la población con necesidades básicas insatisfechas. El asistencialismo y el paternalismo están tan institucionalizados que los sectores marginados mismos los reclaman por considerarlos su única alternativa. Se puede ver la desigualdad en la distribución de la riqueza al observar las grandes fincas y desmontes y, paralelamente, las colonizaciones y recolonizaciones de tierras por parte de comunidades originarias, que en la historia oficial local nunca han aparecido como poseedoras del territorio aunque han estado presentes históricamente como mano de obra. En cambio, se ha forjado una representación social negativa del 'indio' sin tener en cuenta su contexto cultural, sus diferencias o el proceso histórico de subordinación cultural que lo privaba de acceder a un trabajo genuino.

A cinco kilómetros de Orán se encuentra la comunidad tupí guaraní Río Blanco Banda Sur, "Iguopeigenda" (algarrobal en idioma guaraní), que, al momento de solicitar la intervención técnica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 2005, contaba con 54 familias (250 personas), que dependen casi exclusivamente de su producción hortícola y bananera.

De las 240 hectáreas en las que producían, sufrieron una usurpación de 51 hectáreas por parte del 'poderoso vecino': el Ingenio San Martín del Tabacal, hoy propiedad de una empresa norteamericana que cuenta con 25.000 hectáreas

sembradas de caña de azúcar. La empresa avanzó sobre el territorio de la comunidad mediante el uso de un servicio de seguridad privada, aduciendo ser propietario y desconociendo la preexistencia de la comunidad. Solo fue posible detenerlo a través de la defensa de los propios pobladores originarios que pusieron el cuerpo a las topadoras, y lograron limitar el avance hasta que la justicia ordenó detener las acciones. El resultado fue que las hectáreas usurpadas quedaron como una franja que rodea a la comunidad, y a pesar de la orden judicial de "no innovar", se sembró caña sobre los cultivos y ranchos.

La comunidad pudo mantener sus cultivos en las hectáreas restantes y evitó su desaparición al no tener que desperdigarse por las ciudades vecinas, como ya había ocurrido a la cercana comunidad guaraní de La Loma. En cambio, la comunidad Iguopeigenda, luego de cuatro años de reclamo por la vía judicial, y gracias al apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el obispado de Orán y la Pastoral Aborigen, logró que el juez actuante ordenara, en 2008, la restitución de estas "tierras desposeídas con violencia".

Esta lucha, que incluye acosos judiciales y policiales, se superpone a la lucha por la titularización definitiva de la totalidad de las tierras ocupadas, aunque en un pasado no tan lejano, el territorio de la comunidad era mucho mayor.

Intervención en base a la realidad local

La intervención del INTA se inicia durante este conflicto, a pedido de la comunidad y con el apoyo del INAI, para el mejoramiento de las actividades productivas. Sin embargo, la realidad mostró la necesidad de resolver las emergencias anuales de la época de lluvia: las crecidas del río Blanco, cuya causa principal ha sido el mal uso de los recursos hídricos y forestales de la zona.

La comunidad, distante 200 metros de la Ruta Nacional 50, y unida a ella por un camino costero, se encuentra en la margen del río y sufre directamente las consecuencias severas del manejo discrecional de los recursos naturales. 18 kilómetros aguas arriba se encuentra "La Toma", un desvío total del agua en la época seca de invierno, que se utiliza



Construcción de los gaviones de defensa
Foto: autor

para riego del ingenio y de dos fincas, dejando el lecho seco durante ocho meses del año. El desvío se hace con terraplenes de ripio y cada año, al inicio de las lluvias, es desbordado y destruido por la fuerza misma del río, arrastrando consigo enormes cantidades de piedra que aguas abajo se acumula, ensanchándose considerablemente el cauce. Aguas arriba del puente de la Ruta Nacional 50 se encuentra una empresa ripiera que saca áridos modificando el lecho y ocasionando un impacto ambiental que no ha sido estudiado. En la margen opuesta a la que ocupa la comunidad, y aguas abajo del puente, hay otra ripiera que saca materiales produciendo canales y acumulando material de descarte en medio del río. Esto causa que, con el inicio de las crecidas, el agua rebote y se canalice por la margen de la comunidad. A pesar de las exigencias presentadas por la comunidad ante las instituciones correspondientes, se desconocen los permisos oficiales extendidos a los empresarios para trabajar de esa manera.

Así, la propuesta tradicional de asistencia técnica del INTA se enfrentó con una emergencia: controlar los avances del río que causan una pérdida de cinco hectáreas por año de la tierra que la comunidad ha defendido con su lucha.

Más que garantizar un aumento de la producción, era necesario evitar que se perdieran los cultivos y que se bloqueara el único camino de acceso para sacar una producción perecedera como la banana, así como mejorar íntegramente la calidad de vida de la comunidad. La emergencia se impuso y fundamentó un trabajo de gran envergadura que finalizó sin conflictos.

En 2006, con la primera crecida en la que interviene el INTA y en la que se pierden cinco hectáreas de bananales, se realizan las denuncias ante las instituciones correspondientes. Posteriormente, se hicieron consultas a fin de presentar ante el INAI un presupuesto para hacer defensas y canalizar el río. La siguiente temporada de lluvias provocó el corte del único camino de acceso y se perdieron cinco hectáreas más. Con el esfuerzo de cada 'hermano', como se llaman mutuamente dentro de la comunidad, se reabrió el camino y se evitaron más pérdidas de tierras.

En la siguiente temporada, gracias a gestiones del INAI ante Vialidad Nacional, se adjudicaron obras para regularizar la situación en el río, protegiendo el puente solo 200 metros aguas arriba de la comunidad y construyendo tres ga-

viones sobredimensionados de defensa hasta el límite entre las tierras del ingenio y las de la comunidad. Para este trabajo fue contratada sin licitación la misma empresa ripiera de la margen opuesta a la de la comunidad, que según informes de la Secretaría de Minería “contribuyó con sus acciones” a generar la crisis que se quería solucionar.

El proyecto

Con la experiencia organizativa, y ya estudiado el funcionamiento del río, se encaró un proyecto de autoconstrucción de defensas con el asesoramiento de ingenieros privados, el aporte financiero del INAI y la formulación y dirección del proyecto por parte de la Agencia de Extensión Rural Orán del INTA. El proyecto incluía: diseño y construcción de nueve gaviones de defensa, hechos con el trabajo ad honorem de los miembros de la comunidad.

Al llegar las crecidas, la obra se encontraba a un 75% de avance. Se habían aportado recursos financieros y más de 2000 horas hombre por parte de la comunidad. Ese mismo verano se pudo comprobar la eficacia del esfuerzo: no se perdió ni un metro más de tierra y el camino permaneció abierto. Los nuevos gaviones no sufrieron daños con las crecidas, en comparación con los construidos por encargo de Vialidad Nacional, que quedaron seriamente dañados. Tras el paso de las lluvias se completaron el sexto y séptimo gaviones, y se hicieron arreglos y correcciones a los restantes. Los dos gaviones faltantes quedaron sin presupuesto, a la espera de un nuevo

proyecto para concluir la obra. El temor a encarar el proyecto, por la cantidad de horas demandadas y por los compromisos institucionales e intereses involucrados, fue superado gracias al compromiso y la certeza de una elección adecuada para el desarrollo local, lográndose paralelamente una experiencia y un crecimiento organizativo en la comunidad.

En conclusión: más allá del proyecto

Surgen muchas preguntas para seguir trabajando a mediano y largo plazo, una vez defendida la tierra por la cual se lucha: ¿responde la comunidad al trabajo planteado junto a instituciones como el INTA, más allá de las emergencias?, ¿es real la revalorización de la cultura del trabajo y la cultura local del pueblo originario a partir de sus tierras, como disparador de un crecimiento con base en una autoestima con otros parámetros? Se desarrolló un trabajo innovador en la zona: escuchar y observar para encarar un acompañamiento en el que el conflicto por la tierra no pasa solo por lo legal, sino por el trabajo y el manejo de los recursos naturales, sin esperar favores del político de turno, reconociéndose como individuos con derechos y obligaciones, en igualdad de condiciones para reclamar lo que se considera como propio. ■

Matías García Rodríguez

Ingeniero agrónomo

Becario de la Agencia de Extensión Rural Orán del INTA

Correo-e: mgorodriguez@correo.inta.gov.ar

Miembros de la comunidad en la obra terminada

Foto: autor





Geraizeiros durante una romería en Areião, Rio Pardo de Minas
Foto: Luciano Dayrell, 2011

Rebelión en los *sertões* o la resistencia local de los pueblos ante la desterritorialización de la agricultura

CARLOS ALBERTO DAYRELL

El golpe militar del 31 de marzo de 1964 tuvo repercusiones casi inmediatas en la región Norte de Minas. Fue la señal para que los hacendados y los militares desataran lo que se conoce como el primer desalojo de Cachoeirinha. Sin cobertura en los noticieros de la época, en septiembre de 1964, soldados y *jagunços* (guardias armados de los hacendados) invadieron las propiedades de decenas de familias de las llanuras de San Francisco, a orillas del Gran Río Verde y su afluente, el Arapuim. En 1967 hubo otro desalojo de familias en resistencia que habían recuperado sus tierras. Esta vez, el despojo, amparado por el mismo mandato de 1964 y acreditado por un juez de paz, afectó a cientos de familias en un área mucho más amplia.

Quemadas las casas, destrozados los graneros llenos de productos, animales robados o muertos; cientos de familias acuden a la ciudad de Cachoeirinha. Sin tener a donde ir, muchas de ellas acampan bajo el puente del Gran Río Ver-

de. El padre José, párroco de Varzelândia, al saber que hay niños muriendo de hambre, moviliza a la ciudad para aliviar las condiciones de sufrimiento en que viven las familias desplazadas. Casi 20 años después del primer desalojo, con casi un centenar de niños muertos de hambre y el asesinato de tres líderes de colonos, el entonces gobernador de Minas Gerais, Tancredo Neves, firma la expropiación de las fincas para ubicar a las familias de Cachoeirinha que aún resistían. Pero pronto la expropiación es apelada ante la corte, aun cuando constitucionalmente solo la Unión podía hacerlo.

El Norte de Minas en el contexto del desarrollo regional

Como testigo ocular de eventos relacionados con la disputa territorial, Alvimar Ribeiro dos Santos, agente da de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), relata varios asesinatos de

líderes campesinos, como el de Eloy Ferreira da Silva, muerto en diciembre de 1984 en el conflicto de la hacienda Menino; los de Rosalino, Manoel Fiuzza y José Teixeira, líderes del pueblo Xakriabá, asesinados en una masacre perpetrada por el hacendado Amaro en el territorio reclamado por la comunidad indígena, en febrero de 1987; el de Donato, asesinado por jagunços en la hacienda Agua Branca, en julio de 1989, por órdenes de Antonio Luciano, latifundista de Belo Horizonte. Es a partir de este período que se inicia una gran transformación del campo brasileño, resultando en la 'modernización de la agricultura', a través de la llamada Revolución Verde.

Por aquel entonces, tanto a nivel federal como estatal, se comenzaron a implementar programas y proyectos con el fin de "integrar a la región en la dinámica de la economía nacional, eliminar las bolsas de pobreza y combatir los efectos nocivos de la sequía". La Superintendencia de Desarrollo del Nordeste planifica y ejecuta políticas de incentivos fiscales y financieros, mientras que el gobierno del estado invierte recursos públicos en infraestructura básica: carreteras, energía y telecomunicaciones. Se promueve un amplio proceso de regularización territorial a la inversa: privatizando tierras comunales a favor de hacendados y nuevos empresarios que ven en la región una oportunidad de negocios.

Hoy pueden verse los resultados de tal hazaña. Gracias a la inversión pública en infraestructura, la cría de ganado vacuno, la producción forestal y la agricultura intensiva, el paisaje regional fue severamente alterado: procesos económicos que no estaban atados a la lógica del capital fueron paulatinamente desestructurados; los territorios tradicionales, invadidos por las grandes haciendas y empresas rurales, y la rica biodiversidad y agrobiodiversidad, reemplazadas por plantaciones de monocultivos. A esto se añade la degradación de los ecosistemas locales y el deterioro de los recursos hídricos regionales provocado por la alteración del delicado equilibrio que sostenía un extenso sistema hidrográfico. La resistencia campesina fue rápidamente silenciada mediante el asesinato, la expulsión violenta y la oferta de espacios o lotes urbanos para reubicación de las familias desplazadas.

Insurgencia nativa

A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, en defensa de los derechos de los campesinos desposeídos, el movimiento sindical crece en la región. Emergen personalidades como Antonio Inácio, que deja el oficio de *tropeiro* (vaquero o jinete pastor de ganado vacuno) y ayuda a crear el Sindicato de Trabajadores Rurales de Januária. El antiguo oficio de *tropeiro* decayó al abrirse carreteras para facilitar la ocupación de tierras supuestamente vacías, y que son tomadas ilegalmente por los *gaúchos* en el antiguo distrito de Serra das Araras (hoy municipio de Chapada Gaúcha) o por las empresas reforestadoras de las grandes llanuras.

Antonio Inácio se unió al movimiento sindical y, en 1980, al emergente Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra que se extendía por el sur de Brasil llevando esperanza a miles de familias que estaban perdiendo sus tierras bajo el avance de los latifundios. Recorre las comunidades defendiendo los derechos de los campesinos que se resisten al despojo. A través del movimiento sindical establece una íntima amistad con Eloy Ferreira da Silva, sindicalista como él en el municipio de São Francisco. Juntos desarrollan una visión crítica sobre la región Norte de Minas, la van divulgando por donde pasan.

Al fin, los vientos de la opresión abierta van cambiando. Con la nueva Constitución, fruto de articulaciones de la

sociedad civil brasileña, los pueblos y las comunidades tradicionales comienzan a surgir con características diferentes de las que tenían hasta entonces. Las poblaciones negras empiezan a reclamar su derecho a la tierra, mientras aquellas de las llanuras dominadas por el cerrado, su derecho a tierras comunales; ambas esenciales en la preservación del patrimonio inmaterial del que son portadoras.

Se inicia la articulación con entidades y organizaciones que simpatizaban con los sectores rurales excluidos de los procesos sociales regionales. En este contexto se crea, desde 1985, la organización conocida como Centro de Agricultura Alternativa del Norte de Minas (CAA), que surge como un proyecto articulado con la Casa de Pastoral de Montes Claros, y en 1989 se institucionaliza como AS-PTA. Durante la década de 1990, el Foro Regional de Desarrollo Sostenible es un espacio donde el CAA, la CPT, la Central Única de Trabajadores, la Federación de Trabajadores Agrícolas de Minas Gerais y sindicatos de trabajadores rurales promovieron debates y acciones en torno al desarrollo regional, a favor de nuevas perspectivas sociales y de la no subordinación a los dictados del capital y la lógica de la revolución verde. El CAA analizaba así el contexto regional:

"El 'desarrollo', del Norte de Minas no tomó en cuenta la existencia de una diversidad de poblaciones rurales que históricamente generaron estrategias de manejo de recursos naturales, tales como el aprovechamiento del potencial de los diferentes hábitats, el uso de variedades genéticas de plantas desarrolladas y adaptadas a los diferentes agroambientes y el aprovechamiento de la biodiversidad nativa. Por el contrario, afectó las bases del sustento y la reproducción social de los grupos de pequeños agricultores, dejándolos en una situación aún más frágil frente a las adversidades climáticas de la región".

A través de la Red Cerrado, constituida en 1992, el movimiento se vincula con los cerrados brasileños y se constituye la Articulación del Semiárido (ASA). Al mismo tiempo, aumenta la interacción con los sectores vinculados a la investigación, lo que permitió abrir los ojos a la comprensión de la complejidad de los ecosistemas y la cultura de la región.

La creación de la Cooperativa Agroextractiva Gran Serão, a finales de la década de 1990, promovida por un grupo de agricultores campesinos, se inserta en los circuitos económicos de la agricultura campesina, hasta ahora invisible para las políticas públicas. Las luchas aisladas de familias *posseiras* (invasoras), localizadas en ambientes y contextos socioeconómicos y culturales diferentes, toman nuevo aliento al descubrirse portadoras de diferentes geohistorias (Dangelis Filho, 2005). Así, el pueblo Xakriabá consigue la demarcación de una parte de su territorio y sigue movilizado hacia la conquista de las áreas que quedaron fuera de la demarcación, al tiempo que en las elecciones de 2004, asume el destino político del municipio, del que son mayoría poblacional y electoral. En Brejo dos Crioulos, tras una lucha feroz y continua de la comunidad *quilombola*, se logra su reconocimiento en diciembre de 2007, después de casi diez años de lucha. En la región del Alto Río Pardo, las comunidades *geraizeiras* se levantan ante la pérdida de sus territorios tradicionales y se vinculan con la Vía Campesina. En pocos años, las áreas ocupadas por monocultivos de eucalipto son retomadas y se inicia la ejecución de un proyecto de reconversión agrícola. En las vastas tierras bajas sanfranciscanas, donde se concentran cientos de comunidades negras, y a lo largo del río São Francisco, con cientos de comunidades *vazanteiras*, se inicia la insurgencia contra el acorralamiento de la agricultura campesina por los grandes

proyectos agropecuarios o por los parques –Unidades de Conservación y Protección Integral– creados como compensación ambiental de esos mismos grandes proyectos que afectan a los territorios tradicionales.

Como nos advierte Jean Pierre, una de las características comunes de estas luchas es que sus estrategias de acción no son solo una reacción ante la expropiación. “Al mismo tiempo que luchan por sobrevivir en contextos cada vez más asfixiantes y marcadas por graves violaciones de derechos sociales y por la apropiación de los recursos de los territorios, buscan construir caminos sólidos para la promoción del desarrollo rural sostenible” (Jean Pierre, 2011, comunicación por correo electrónico).

La lucha por la tierra y las demandas territoriales de las comunidades tradicionales

En este contexto surgen nuevos movimientos poniendo sobre la mesa sus demandas de tierras como espacios sociales no capitalistas y no blancos; como espacios de reafirmación de sus autonomías (Costa, 2011). Hacen visible la gravedad de la cuestión agraria regional y la necesidad de que las políticas sectoriales sean elaboradas bajo nuevas perspectivas. Al mismo tiempo que luchan por la recuperación de sus territorios tradicionales, proponen un modelo diferente de ocupación de tierras que considera usos y formas de gestión desarrollados por las propias poblaciones tradicionales. Se perciben como herederos de la gran diversidad genética asociada con sus cultivos tradicionales; generan acciones de valoración de la agrobiodiversidad local, estimulan la producción y el mejoramiento de las semillas locales ‘criollas’; organizan ferias regionales de semillas con apoyo de organizaciones que simpatizan con los movimientos, e integran sus productos culturales a través de la Cooperativa del Gran Sertão.

Lo que distingue a estos movimientos es la visibilización de poblaciones que reclaman no solo la tierra sino también el derecho a ser reconocidas como portadoras de una cultura propia, una forma diferente de ver y actuar en el mundo; que viven con base en una economía que tiene en cuenta valores distintos al lucro o la explotación del trabajo; modos diferentes de usar y manejar el entorno, a partir de conocimientos construidos ancestralmente.

Son iniciativas que trazan perspectivas económicas y sociales diversas, y que, no por casualidad, se articulan y se insertan en la construcción de una política nacional que reafirma la disposición constitucional sobre la existencia de una nacionalidad plural.

Desde el año 2000, la región Norte de Minas resurge en la escena nacional a través de la resistencia de los pueblos del lugar ante los procesos de desterritorialización de la agricultura. Los intereses que enfrenta ahora no son solamente los de los antiguos latifundios, son los intereses de las grandes corporaciones, del capital agroindustrial y financiero, de la minería



Reunião geraizeira da Comunidade de Raiz, 2009
Foto: Arquivo de CAA NM

y la siderurgia, que se mueven en una órbita planetaria. Si el conflicto es local, con la gente pequeña que decide parar las máquinas contra los acaparadores y los políticos corruptos, se necesita llevar a cabo en varios frentes, con inteligencia y, sobre todo, con capacidad de diálogo con quienes, también en distintos espacios, a nivel local, nacional e internacional, buscan sinergias y convergencias en la búsqueda de la sostenibilidad planetaria. ■

Carlos Alberto Dayrell

Ingeniero agrónomo, Investigador del Centro de Agricultura Alternativa (CAA) del Norte de Minas Gerais.
Correo-e: carlosdayrell1@gmail.com

Referencias

- Costa, João Batista de Almeida. 2011. **Sertão: lugar de encontro de gentes e de culturas, síntese multicivilizacional da nação plural**. Montes Claros.
- D'Angelis Filho, J. S. 2005. **Políticas locais para o “desenvolvimento” no Norte de Minas: uma análise das articulações local e supra-local**. Temuco: Universidade Católica de Temuco (dissertação de mestrado em Gestão e desenvolvimento rural e agricultura sustentável).
- Luz de Oliveira, Claudia. 2005. **Os Vazanteiros do Rio São Francisco: um estudo sobre populações tradicionais e territorialidade no Norte de Minas Gerais**. Dissertação (Mestrado em Sociologia). Departamento de Sociologia e Antropologia. UFMG, Belo Horizonte.
- Monção, K. M. G. 2009. **As sementes da luta: o conflito agrário de cachoeirinha - Um estudo dos assentamentos e dos acampamentos do município de Verdelandia, Norte de Minas Gerais**. Dissertação de Mestrado, PPGDS UNIMONTES, Montes Claros.
- Santos, Boaventura de Souza. 2002. **Produzir Para Viver: os caminhos da produção não capitalista**. Ed. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro.

TRABAJANDO EN RED

Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC)

<http://americalatina.landcoalition.org>



INTERNATIONAL
LAND
COALITION

La Coalición Internacional para el acceso

a la Tierra (ILC) es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil e intergubernamentales que trabajan para promover mejores condiciones para el acceso seguro y equitativo a la tierra y el control sobre esta para las mujeres y hombres, a través de la incidencia, el diálogo, el intercambio de conocimientos y la formación de capacidades. En América Latina, la Coalición busca constituirse como un referente y destacar los retos que sus miembros deben enfrentar para garantizar los derechos a la tierra y a los territorios en un contexto regional dinámico y cambiante. Su sitio web contiene documentos interesantes, experiencias y links relacionados al tema del acceso y tenencia de la tierra relevantes para América Latina. También es posible acceder al boletín interno de la Coalición, que brinda información sobre sus iniciativas en la región: proyectos, publicaciones, eventos y noticias vinculadas al desarrollo de la red.

GRAIN

<http://www.grain.org/>



GRAIN es una organización internacional premiada

(Premio Right Livelihood 2011, conocido como el "Premio Nobel Alternativo") por el trabajo de protección de los modos de vida y los derechos de las comunidades campesinas y por denunciar las adquisiciones masivas de tierra agrícola en los países en desarrollo a manos de intereses financieros internacionales. Ha participado en reuniones y talleres en todo el mundo sobre acaparamiento de tierras. Su papel ha sido proporcionar datos y análisis para alimentar los debates. Su sitio web presenta una serie de aportes sobre la tendencia al acaparamiento de tierras. Cuenta con una sección de publicaciones: hojas informativas, informes de investigación, revistas, además de fotos, videos y programas de audio. El sitio puede ser leído en inglés, español o francés.

Farmlandgrab.org

<http://www.farmlandgrab.org>

Farmlandgrab.org fue lanzado por GRAIN como una colección en línea de los materiales utilizados en la investigación que produjo: **¡Se adueñan de la tierra! El proceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria y de negocios en 2008**, un informe publicado en octubre de ese mismo año. Farmlandgrab.org es un proyecto abierto. Si bien actualmente GRAIN mantiene el sitio, cualquiera puede participar en la publicación de los materiales o en el desarrollo del sitio, que contiene sobre todo reportajes y noticias sobre la fiebre mundial por comprar o arrendar tierras de cultivo en el extranjero como estrategia para asegurar el suministro de alimentos básicos o simplemente con fines de lucro. Su propósito es servir de recurso para que en particular los activistas sociales, las organizaciones no gubernamentales y los periodistas puedan monitorear o investigar la temática. Se actualiza diariamente, y todos los textos ingresan según su fecha de publicación original. Si usted quiere rastrear las actualizaciones en tiempo real, es necesario suscribirse a los servicios RSS. Si prefiere un correo electrónico semanal con los títulos de los materiales ingresados en la última semana, también debe suscribirse al servicio de correo electrónico.

Red de Investigación-Acción sobre la Tierra (LRAN)

<http://www.landaction.org>

La LRAN (por sus siglas en inglés) es una red de investigadores y colectivos comprometida con la defensa de la soberanía alimentaria. Nace como respuesta a la carencia de apoyo de forma investigativa/analítica para los movimientos populares involucrados con luchas sobre el acceso a la tierra y otros recursos. El sitio web dispone de artículos y noticias actualizadas, comunicados de prensa, reportes de análisis e investigación sobre la reforma agraria y la transformación del campo alrededor del mundo. El sitio se encuentra en inglés, portugués y español.

Portal Tierra

<http://www.landportal.info>



El control del acceso a la tierra se encuentra amenazado para millones de personas alrededor del mundo, por ello poder tener acceso a la información es clave, al igual que es de crucial importancia en estos momentos poder acceder a las diferentes visiones y análisis de los problemas sobre tenencia de la tierra. Este sitio web constituye una nueva y potente herramienta en línea, diseñada para encontrar, compartir y colaborar, de manera fácil y eficaz, la información sobre tierra. El portal, permite organizar información dispersa y difícil de localizar, ayudando a que esté disponible para una amplia gama de usuarios. Dicho portal fue lanzado durante el III Foro Europeo sobre Desarrollo Rural, celebrado en España, en marzo de 2011.

Portal Territorio Indígena y Gobernanza

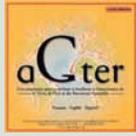
<http://www.territorioindigenaygobernanza.com>



La Iniciativa Territorio Indígena y Gobernanza es un proyecto regional de RRI en América Latina. Su finalidad es contribuir a fortalecer las capacidades de las organizaciones indígenas, tradicionales y campesinas, en la administración y control de sus territorios. Este sitio web es un espacio donde las organizaciones indígenas y las instituciones que colaboran con ellas, pueden encontrar información sobre los territorios indígenas en América Latina, materiales referidos a la gobernanza territorial, documentos legales y técnicos sobre la temática, material audiovisual e información específica sobre los países que han priorizado por ahora la Iniciativa (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá). La sección de Documentos muestra más de 70 libros, manuales para organizaciones indígenas, videos y materiales para la escuela.

AGTER

<http://www.agter.asso.fr>



AGTER es una organización internacional registrada en Francia, cuyo fin es contribuir a mejorar la gobernanza de la tierra, del agua y de los recursos naturales. El sitio web, disponible por el momento en francés, inglés y español, tiene dos objetivos: dar a conocer la asociación AGTER, sus miembros, su proyecto y sus actividades, y poner a disposición de los visitantes análisis y documentos relacionados en su mayoría con el trabajo de AGTER o de sus miembros. Presenta una selección de documentos y recursos para descarga sobre agricultura campesina y seguridad alimentaria, herramientas para mejorar la gobernanza, cartografía participativa y una selección de enlaces que están disponibles a partir del menú.

Coalición Nacional contra el Acaparamiento

<http://detenerelacaparamientodetierras.wordpress.com>

Este sitio web busca generar un proceso de campaña que se desenvuelva a nivel local, regional, nacional e internacional para la defensa del derecho a la tierra y el territorio en aras de frenar el fenómeno de acaparamiento de tierras en Colombia. Su portal incluye información relevante, documentos, artículos de opinión y publicaciones sobre el acaparamiento de tierras y territorios.

Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST)

<http://www.mst.org.br>



Este movimiento es una articulación de campesinos que luchan por la tierra y por la reforma agraria en Brasil.

Es uno de los

movimientos más grandes en el mundo. Nació de las luchas campesinas existentes en Brasil desde el comienzo de la colonización, de la necesidad de la recuperación del territorio para romper con las cadenas

de la injusticia y la pobreza, producida por el modelo de agricultura industrial europea. El sitio web está en portugués, contiene noticias de actualidad, artículos, entrevistas y una biblioteca que aborda diversas temáticas.

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

<http://www.cepes.org.pe/portal>

El CEPES es una institución privada sin fines de lucro, fundada en 1976, especializada en temas de desarrollo agrario y rural. Su propósito fundamental es mejorar las condiciones de vida y producción de los agricultores y pobladores rurales, buscando favorecer la consolidación de una sociedad más democrática y justa en el Perú. En sus publicaciones se incluyen: **Debate Agrario, La Revista Agraria, Informativo Legal Agrario y Notiagro** (en línea). Cuenta con secciones interesantes: radio web rural, videos, resúmenes de noticias y publicaciones que se pueden descargar en formato PDF.

RIMISP Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

<http://www.rimisp.org>

Rimisp es una organización regional latinoamericana sin fines de lucro, cuya misión es el fortalecimiento de las capacidades de los diversos grupos de las sociedades rurales y la expansión de las libertades de las personas que las integran en nuestra región. Como parte de su estrategia de desarrollo viene trabajando en el Programa Dinámicas Territoriales Rurales, con el fin de entender los procesos de cambio de las estructuras económicas y de los marcos institucionales de los territorios rurales y los efectos que estos cambios tienen en el crecimiento económico, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental. Su sitio web ofrece artículos, noticias actualizadas, boletines, revistas y debates sobre temas rurales.

Tierra y Derechos. Un observatorio de los Derechos sobre la Tierra en el Perú

<http://www.observatoriotierras.info>

El Observatorio Tierras y Derechos forma parte de un proyecto más amplio, que consiste en hacer un segui-

miento vigilante de los derechos sobre la tierra de los pequeños agricultores peruanos, particularmente de las comunidades campesinas y pueblos amazónicos, y diseñar y ejecutar acciones de incidencia orientadas al respeto a dichos derechos y a denunciar cuando son violados. El observatorio tiene como objetivo contar con una herramienta útil para los actuales y los potenciales perjudicados en sus derechos de propiedad del sector de la sociedad rural que podríamos denominar los pobres rurales. Este seguimiento implica obtener información de distinto tipo, sistematizarla y analizarla, difundirla a través de diferentes medios, hacer informes periódicos y acciones de incidencia. En la sección de documentos se pueden encontrar publicaciones recientes –nacionales e internacionales– relativas a la problemática de la tierra. En el caso del Perú, destaca **La Revista Agraria** que a lo largo de 10 años ha dado cobertura continua al tema.

Fundación Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Reforma Agraria (TIERRA)

<http://www.ftierra.org>



Este Portal corresponde a la Fundación Tierra, una

institución dedicada a promover el desarrollo rural, estimular la democratización en el acceso, tenencia y uso de los recursos naturales. Los destinatarios de su trabajo son campesinos, indígenas y sus organizaciones sociales. La Fundación focaliza su atención en la generación de las condiciones previas para el desarrollo impulsando el acceso equitativo a los recursos naturales (tierra-territorio), la formación de territorios indígenas como espacios de ejercicio pleno de derechos y el fortalecimiento de capacidades de gestión de las organizaciones. A través de este portal se puede acceder al Observatorio de Territorios Indígenas, sitio dedicado a informar sobre territorios de pueblos indígenas, pueblos originarios y campesinos de origen precolonial de Bolivia. El Portal cuenta con secciones especiales que contienen publicaciones, material de capacitación, boletines, multimedia, noticias, leyes, además de una biblioteca.

Los derechos a la tierra y la fiebre por ella

Ward Anseeuw, Liz Alden Wily, Lorenzo Cotula, Michael Taylor, 2011. ILC, IIED, CIRAD. Roma, Italia.

<http://americalatina.landcoalition.org/node/2692>



Este informe presenta una síntesis de los hallazgos del Proyecto de Investigación Global Presiones Comerciales sobre la Tierra. Como resultado del proyecto ya se han publicado 28 estudios de caso, donde se examinan las características, los factores de impulso y las implicancias y tendencias de la creciente presión comercial sobre la tierra. También incorpora los últimos datos del actual proyecto Land Matrix, cuyo propósito es monitorear las transacciones de tierras a gran escala. El objetivo de este informe es presentar, resumir e interpretar la evidencia que ha surgido hasta el momento como fruto de la colaboración de estos dos proyectos. Se busca extraer conclusiones de este conjunto de evidencias sobre las características clave de la fiebre por la tierra, sus efectos, los factores contextuales que dan forma a estos efectos y las respuestas que se requieren de la sociedad civil, los gobiernos y los socios en el desarrollo. Busca modelos de inversión con los usuarios locales, respetando sus derechos a la tierra y sus capacidades. El informe completo se presenta en inglés, pero es accesible para el público hispanohablante a través de un resumen de doce páginas en castellano.

Acaparamiento mundial de tierras y trayectorias de cambio agrario: un análisis preliminar

Saturnino M. Borrás Jr., Jennifer C. Franco, 2012. En: Journal of Agrarian Change, Vol. 12, No. 1, enero 2012, pp. 34-59.

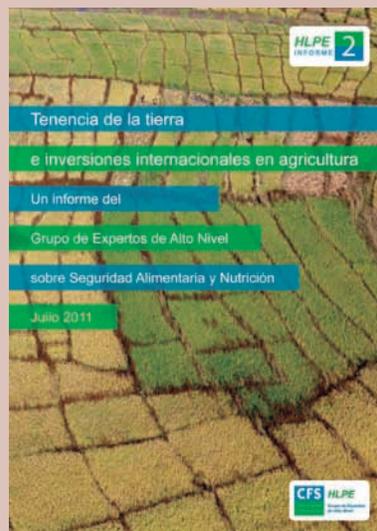
<http://www.tni.org/es/node/71001>

‘Acaparamiento de tierras’ se ha convertido en una frase muy utilizada para referirse a la explosión de las transacciones de tierras nacionales comerciales, principalmente en torno a la producción y exportación de alimentos, piensos, biocombustibles, madera y minerales. Dos dimensiones clave de la apropiación de tierras –la política de cambios en el uso de la tierra y las relaciones de cambio de propiedad (y la relación entre ellas)– no son lo suficientemente explorados en la literatura actual. Por ello, este artículo trata de llenar este vacío ofreciendo un análisis preliminar a través de un enfoque analítico que sugiere algunas tipologías como un paso hacia un entendimiento más completo y mejor de la política de acaparamiento de tierra a nivel mundial (en inglés).

Tenencia de la tierra e inversiones internacionales en agricultura

HLPE, 2011. Roma, 2011. Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLPE).

<http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es/>



El presente informe, emitido por El Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLPE por sus siglas en inglés), plantea nuevas interrogantes respecto de las ventajas y desventajas de la adquisición de tierras agrícolas a gran escala en países pobres. Existen escasos indicios de que las adquisiciones de tierras a gran escala hayan sido rentables para los inversionistas, incrementado la producción agrícola o generado empleo y suministrado alimentos a los habitantes locales. El informe plantea que “más de tres cuartas partes de las transacciones de tierras anunciadas todavía no se materializan en inversiones tangibles en términos de producción agrícola. Solo un 20 por ciento de las inversiones ha redundado en producción agrícola”. Se formulan algunas recomendaciones dirigidas a los gobiernos, las instituciones internacionales y los inversionistas para hacer frente a las preocupaciones planteadas por este creciente interés en la adquisición de tierras.

¿Podemos ser autónomos? Pueblos indígenas vs. Estado en Latinoamérica

Pablo Ortiz-T., Alberto Chirif, 2010. Intercooperation / RRI. Quito, Ecuador.

<http://www.rightsandresources.org/publications.php>



El derecho a la tierra y al territorio, en el caso de los pueblos indígenas, forma

parte de un conjunto de otros derechos colectivos, entre los cuales están el derecho a la autonomía y al autogobierno. Esta publicación presenta dos documentos: el primero, "Dilemas y desafíos de la autonomía territorial indígena en Latinoamérica", hace un balance de los procesos de autonomía indígena en la región a partir de cinco de los casos más significativos (Panamá, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Bolivia). El segundo, "Situación y amenazas actuales contra los indígenas amazónicos, el caso del Perú", hace un análisis más específico sobre la problemática peruana. Entre las ideas centrales de los autores están los permanentes obstáculos que los propios Estados van colocando para que la autonomía indígena, hoy consagrada en normas jurídicas internacionales y en las propias legislaciones nacionales, no termine de concretarse.

El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia

Saturnino M. Borrás Jr., Jennifer C. Franco, Cristóbal Kay, Max Spoor, 2011. FAO.

<http://www.tni.org/node/70998>



Este informe presenta un análisis crítico sobre el acaparamiento mundial de tierras. Se basa en una investigación empírica sobre las condiciones y tendencias de este fenómeno en 17 países de América Latina y el Cari-

be. Por un lado, el marco analítico es amplio, pues analiza los procesos generales de las tierras rurales y la concentración de capital en el contexto de la globalización neoliberal. Por el otro, es focalizado porque analiza el fenómeno del acaparamiento de tierras basándose estrictamente en tres dimensiones específicas: i) el largo alcance de las adquisiciones de tierra a gran escala; ii) la participación de los gobiernos extranjeros en los tratos sobre tierras, y iii) el impacto negativo de las inversiones recientes en tierras sobre la seguridad alimentaria del país receptor. La mayoría de los estudios pudieron desentrañar y recopilar gran cantidad de material empírico relacionado con la dinámica de las tierras en la región, lo que constituye una base de información y conocimiento sobre las cuales puede promoverse un debate de políticas públicas al respecto. El Informe fue presentado en el seminario Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe, organizado por la Oficina regional de la FAO, en noviembre de 2011.

Respuesta a la "apropiación de tierras" y promoción de la inversión responsable en la agricultura

Harold Liversage, 2011. ISBN 978-92-9072-215-1. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

http://www.ifad.org/pub/op/2_s.pdf

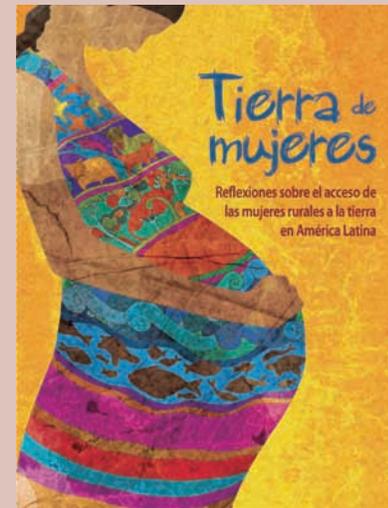
La controversia actual sobre las adquisiciones de tierras en gran escala por parte de inversionistas extranjeros ha vuelto a situar las cuestiones relacionadas con los derechos sobre la tierra y la inversión agrícola responsable en un lugar destacado de la agenda mundial de desarrollo. También ha suscitado interrogantes acerca de la trayectoria futura del desarrollo en el mundo. En ambos casos, se ha abierto un espacio importante para el debate internacional sobre el modo de mejorar los sistemas de administración de la tierra y la inversión en la agricultura, a fin de fortalecer los derechos sobre la tierra y los medios de vida de los pequeños agricultores, pastores, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables. Este documento pretende contribuir al debate mediante una reflexión sobre

los retos que se plantean y algunas de las posibles respuestas, en particular, las distintas directrices para promover la gobernanza de la tierra y la inversión responsable en la agricultura.

Tierra de Mujeres. Reflexiones sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra en América Latina.

Carmen Diana Deere, Susana Lastarria-Cornhiel, Claudia Ranaboldo, 2011. ISBN 978-99954-770-4-2. Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra y Fundación TIERRA. La Paz, Bolivia.

<http://www.infoandina.org/node/138558>



Este libro es el resultado de un esfuerzo colectivo de muchas mujeres de diversos lugares de América Latina, que han aportado a él desde sus experiencias. Incluye reflexiones, visitas, discusiones y encuentros. Se presentan seis investigaciones llevadas a cabo en 2009, dos conversatorios internacionales y las reflexiones de las autoras –tres especialistas agrarias– que dialogan a partir de sus especialidades para generar conocimiento. El volumen ofrece una serie de planteamientos sobre la situación actual de las mujeres en torno al ejercicio de sus derechos, las limitantes para su acceso a la tierra, los procesos y desafíos que conllevan a su empoderamiento a través del desarrollo de capacidades, los territorios comunales, entre otros temas clave que subyacen en el complejo universo de la mujer rural latinoamericana.

El rol de las comunidades campesinas frente a los recursos naturales y las actividades extractivas

MARTÍN VALDIVIA



Foto: Enrique Castro

En el Perú existen más de seis mil comunidades campesinas y 1.497 comunidades nativas amazónicas. Estas mantienen el control de un vasto territorio que alberga una gran diversidad biológica de flora y fauna, así como invaluables recursos naturales. Las comunidades campesinas y nativas controlan cerca de las dos quintas partes de las tierras agropecuarias del país (Lapeña, 2011), implementando tecnologías ancestrales, en algunos casos ecoeficientes, para su explotación, con una gran capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático. Este grupo poblacional es poseedor de tradiciones milenarias y mantiene una relación de profunda espiritualidad con el ambiente donde se desarrolla. También presenta los más altos niveles de vulnerabilidad social (entendida como una mayor susceptibilidad a efectos externos económicos, sociales, culturales y ambientales) e índices de pobreza monetaria.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el año 2010, en la Sierra Rural, el 61,2% de la población se ubica en situación de pobreza monetaria, mientras que el 28,5% en situación de extrema pobreza. En la Selva Rural, el 45,6% se encuentra en pobreza monetaria y el 17,8% en extrema pobreza. Esta situación responde a la ausencia del Estado en la zona y la poca voluntad política por implementar políticas públicas para promover la articulación de las comunidades con la sociedad y con mercados más dinámicos.

A la fecha, las actividades extractivas se encuentran en un momento de auge en el Perú. Solo en el período de enero a octubre de 2011 la inversión en minería ascendió al nivel récord de USD 5.325 millones, con efectos positivos en el empleo y en la dinamización de los mercados a nivel nacional. La Sociedad Nacional de Industrias sostiene que entre 1999 y 2009 la minería representó el 7,7% del PBI y el 12,5% del total de recaudación fiscal (incluyendo regalías y aporte voluntario). El gobierno ha manifestado públicamente la importancia de la minería para poder sostener los amplios programas sociales prometidos durante la campaña electoral 2011.

El éxito del crecimiento de las actividades extractivas responde a una agresiva política de promoción de las inversiones mineras y de hidrocarburos, liderada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) durante el gobierno anterior. Esta promoción consiste en la acelerada concesión de lotes mineros y de hidrocarburos, así como en la rápida aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). El gobierno anterior (2006-2011) dejó 50 EIA aprobados, y en junio de 2011, 24 millones de hectáreas estaban entregadas en concesión minera (18,91% del territorio peruano). Al mismo tiempo, en mayo de 2010, el 64,98% del territorio de las comunidades nativas de la amazonía había sido entregado en concesión como lotes para la extracción de hidrocarburos. Este gran impulso a las concesiones ha impactado directamente en las comunidades campesinas y nativas, las cuales vienen sien-

do presionadas por el uso de los recursos naturales ubicados dentro de su territorio, quedando expuestas a diversos intereses económicos y políticos. En un entorno en donde el rol fiscalizador del Estado es muy débil, ya que se limita a aprobar EIA y otorgar concesiones, la ejecución de los proyectos extractivos y el destino de las comunidades, dueñas de extensos territorios que abarcan importantes recursos naturales para la vida, se ha venido decidiendo a través de negociaciones entre las empresas extractivas y los dirigentes de las comunidades, negociaciones que se caracterizan por su marcada asimetría en la información y clara ventaja para las empresas. De esta manera, tenemos un gran número de comunidades que se han sentido despojadas de sus tierras, con sus recursos naturales y medios de vida afectados, viéndose cómo enormes recursos económicos pasan de lado. Esto ha traído como consecuencia un número alarmante de conflictos con consecuencias trágicas. Según la Defensoría del Pueblo, durante el gobierno anterior hubo alrededor de 80 muertos en conflictos sociales y al 31 de diciembre de 2011



Croquis de efectos de relave en la comunidad de Comunpata

existen 223 conflictos sociales activos, 57% de los cuales son socioambientales.

En lo que va del nuevo gobierno, el Presidente Ollanta Humala ya 'tiene a cuestras' dos importantes conflictos sociales con víctimas humanas, millonarias pérdidas y un cambio de gabinete. Un entorno político y mediático abiertamente hostil orienta el debate hacia una polaridad de 'antimineros' versus 'promineros', en un espiral de adjetivos que no hacen más que generar propuestas infructuosas como el radical "no a la minería" o el populista "repartamos el canon". Es de vital importancia colocar a las comunidades campesinas y nativas como actores centrales en este debate, reconociendo la prioridad que deben tener en las políticas de superación de la pobreza, revalorizando sus conocimientos, sus derechos y el rol que cumplen en el manejo de los recursos naturales ubicados en su territorio. Las comunidades están en la capacidad de contribuir en la elaboración de políticas públicas que promuevan su propio desarrollo, gestionar su territorio y el uso de sus recursos naturales, así como negociar -en una



Recogiendo los relaves en Ccascabamba, Angaraes
Foto: Archivos SISAY

situación de mayor equidad en la información– con las empresas extractivas la implementación de proyectos que aseguren mejores condiciones de vida, respeten sus derechos y sean sostenibles para el ecosistema y las formas de vida que alberga. Para conseguir esto, es crítico el rol que debe asumir el Estado al acompañar a las comunidades y regular las negociaciones con las empresas, y de esta manera, asegurar y fiscalizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades campesinas y nativas. ■

Martín Valdivia

Oficial, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cambio Climático, Diakonia.

Correo-e: martin.valdivia@diakonia-la.org

Referencias

- Defensoría del Pueblo. 2011. **Información estadística del estado de los conflictos sociales** (en línea, consultado en diciembre de 2011) Perú. Disponible en <http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php?sec=1&pag=5>
- Instituto del Bien Común. 2011. **Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana (SICNA)** (en línea). Lima, Perú. Disponible en <http://www.ibcperu.org>
- Instituto Peruano de Economía. 2011. **La tributación minera en el Perú: Contribución, carga tributaria y fundamentos conceptuales** (en línea). Lima, Perú. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Disponible en <http://www.snmpe.org.pe/pdfs/Tributacion-Minera-en-el-Peru/Libro-La-tributacion-Minera-en-el-Peru.pdf>
- Lapeña, Isabel. 2011. **Dicen que somos el atraso. propiedad comunal y agrobiodiversidad en el Perú**. SPDA, MacArthur. Lima, Perú.
- Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. 2011. **Política económica y social** (en línea). Lima, Perú. Disponible en <http://www.mef.gob.pe>
- Portal de Noticias de la Minería Peruana. 2011. **Octavo Informe del Observatorio de Conflictos Mineros** (en línea, consultado en diciembre de 2011). Disponible en <http://www.perumineria.com/2011/12/26/inversion-en-mineria-se-dio-en-22-regiones-y-ascendio-a-us-5325-millones/>

Seminario Nacional “Comunidades Altoandinas, Inclusión Social y Actividades Extractivas”

El escenario que articula la realidad de las comunidades campesinas es una compleja combinación de factores que dificultan la superación de su situación de pobreza y de exclusión social y política. Entre estos factores tenemos: las deficiencias educativas, precariedad de los servicios públicos, baja productividad y rentabilidad de la actividad agropecuaria, alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, problemas de territorialidad y afectación de tierras de comunidades campesinas por actividades extractivas.

Con el propósito de generar propuestas concertadas y validadas socialmente para resolver la problemática generada por los factores mencionados, se llevó a cabo el Seminario Nacional “Comunidades Altoandinas, Inclusión Social y Actividades Extractivas”, los días 5 y 6 de diciembre de 2011 en la ciudad de Lima.

Logramos reunir a 82 líderes de comunidades altoandinas de diez regiones del Perú que dialogaron e intercambiaron puntos de vista y conocimientos con especialistas de instituciones de la sociedad civil y representantes de distintos

sectores del Estado. A través de este diálogo se identificaron los problemas principales generados por la exclusión social y las actividades extractivas que se desarrollan en su territorio y, a partir de esta identificación, se elaboraron propuestas concretas para su superación.

Estas propuestas fueron presentadas a representantes de los sectores clave del gobierno central durante la sesión de cierre del seminario y en visitas realizadas por los líderes comunales a entidades públicas durante el día 7 de diciembre de 2011.

El impacto ambiental del proyecto minero Conga: más allá de lo enunciado

MIRELLA GALLARDO MARTICORENA

La controversia generada por el Proyecto Minero Conga en el Departamento de Cajamarca al norte del Perú, es resultado de una “demanda democrática” de la gente que clama legítimamente por ser consultada y participar en los beneficios de la inversión minera. En este sentido son varios los aspectos de política institucional, normatividad y participación ciudadana que el gobierno peruano debe abordar con independencia e inteligencia, por la inclusión social.

El Estudio de Impacto Ambiental que presentó la empresa minera fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (responsable también de la promoción de la minería), pero recibió muchas críticas de las instituciones cajamarquinas y del Ministerio del Ambiente. Este artículo pretende aportar al debate, incorporando otros elementos que aún no han sido tomados en cuenta.

Es difícil imaginar que un paisaje altoandino de inmensos cerros, lagunas, bofedales y pastos pueda ser removido y luego transformado en pirámides simétricamente dispuestas y, aparentemente, pertenecientes a otro paisaje geomorfológico, distinto al de la jalca cajamarquina. Sin embargo esto ha pasado, como lo muestra la vista aérea de la zona (fuente: Google Earth).

El paisaje natural de la zona de explotación de la mina Yanacocha está completamente alterado, y en su vecindad –hacia el este y noreste– se ubica la zona del proyecto Conga, que aún no ha sido alterada. La explotación minera –especialmente la de tajo abierto– genera cambios de enormes dimensiones, lo que demanda que antes de ponerla en práctica, estos deben ser cuidadosamente analizados.

Los ecosistemas denominados altoandinos, en este caso, jalcas cajamarquinas, no solamente brindan extraordinarios paisajes, sino que también albergan una gran biodiversidad y poblaciones significativas de especies endémicas locales, entre las cuales se encuentran las hierbas medicinales que crecen en este entorno y otros cercanos, pero no en otros lugares del planeta. Estos parajes cajamarquinos brindan valiosos servicios ambientales pues son zonas de purificación de aire, reciclaje de nutrientes, provisión y regulación de agua.

De todas las bondades mencionadas, el aspecto más crítico para la vida de las sociedades que dependen de ellas,



es el de provisión de agua. Las jalcas intervienen tanto en la cantidad de agua que se genera en las cuencas, como en la regulación hídrica, que implica la permanencia en el tiempo del caudal generado.

- La cantidad total de agua generada está principalmente en función de la precipitación, a la que se suman la captación de agua de nieblas por la vegetación, así como su nivel de evapotranspiración y de consumo de agua. Se sabe que la precipitación se incrementa con la altitud, pero sin vegetación y en suelo impermeable, toda el agua de lluvia escurriría inmediatamente hacia las zonas bajas, y se agotarían de esta manera todas las reservas para la época de estiaje.
- La regulación hídrica ayuda al mantenimiento del agua en los ríos durante todo el año, lo que implica una capacidad de almacenamiento de agua. Esta se da a través de mecanismos de regulación que pueden ser naturales tales como los glaciares, lagunas, suelo, acuíferos subterráneos, etc., y también artificiales como los embalses.

En las jalcas cajamarquinas no existen glaciares pero sí lagunas, suelos y acuíferos subterráneos. La vegetación capta la lluvia que suele ser de baja intensidad a esa altitud y, a través de su historia, los suelos han desarrollado condiciones



Laguna San Nicolás de Chayhuagón (7 hectáreas), localizada en las inmediaciones del campamento del proyecto Conga
Foto: Archivo de la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional Cajamarca

de infiltración y retención de agua, alimentando así los acuíferos subterráneos que permiten el flujo lento aguas abajo y que son fuente de manantiales, bofedales y quebradas durante el tiempo posterior a la época de lluvias. Por todo ello, no en vano un conocido botánico peruano ha propuesto considerarlas Centros Hidrológicos.

La implementación de un proyecto minero en este contexto implica no solamente la alteración de las lagunas como reguladoras naturales de agua, sino también la alteración de acuíferos y del suelo, en superficies y volúmenes enormemente significativos (alrededor de 500 metros de profundidad y en un área de varios miles de hectáreas). No basta entonces calcular las capacidades de almacenamiento de las lagunas y reemplazarlas por reservorios, sino que además es necesario hacer varias preguntas: ¿Cómo impactará el movimiento de tierras a la captación del agua de lluvias que alimenta los acuíferos que afloran más de allá de las áreas de influencia directa e indirecta? Si las operaciones de excavación se realizan necesariamente en seco, ¿cuál será su efecto en los flujos de agua subterránea?, ¿cuántos manantiales, filtraciones, bofedales serán afectados en el área de influencia directa?, ¿cuáles son sus caudales, funciones y usos?

Como ciudadanos de este país, considero que no es momento de enfrentarnos en posiciones extremas, sino de construir conciencia ciudadana colectiva, basada en el co-

nocimiento, en la verdad y en el derecho que tienen todas las personas cuya continuidad de vida en su propia tierra es afectada por ciertos proyectos extractivos, como es el caso de la explotación minera en una zona de la jalca cajamarquina. Es momento de construir los procedimientos que hagan posible el desarrollo económico en conjunto. ■

Mirella Gallardo Marticorena

Ingeniera agrícola, especialista en recursos hídricos y temas ambientales.

Ex asesora técnica del PDRS-GTZ (hoy GIZ), Cajamarca.

Correo-e: mirella.gallardo@gmail.com

Referencias

- Acosta, Luis. 2011. **Exposición en el Proyecto Punas, Agua y Cambio Climático**. Instituto de Montaña/CONDESAN.
- García Sayan, Diego. 2011. **Cuatro lecciones de Conga**. *La República*, Lima, Perú. 11 de diciembre.
- Gobierno Regional Cajamarca. 2011. **La diversidad biológica en Cajamarca. Visión étnicocultural y potencialidades**. Gobierno Regional Cajamarca, Universidad Nacional de Cajamarca, Programa Desarrollo Rural Sostenible de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - GmbH.

Consumo y demanda interna de ajíes nativos (*Capsicum* spp.) en Perú y Bolivia



Seleccionando ajíes secos
Foto: Autora

JAQUELINE GARCÍA YI

Perú y Bolivia constituyen uno de los centros de biodiversidad del género *Capsicum*, el cual incluye a los ajíes nativos y similares. Se considera que existen alrededor de 2.000 variedades nativas de ajíes. Algunas de estas variedades se utilizan como ingredientes en platos tradicionales de estos países; sin embargo, la gran mayoría se encuentra subutilizada y en peligro de extinción.

Estos ajíes nativos, además de aportar sabores únicos, también son ricos en vitaminas, antioxidantes y Capsaicina, un compuesto con propiedades medicinales y pesticidas.

La presente nota es un breve resumen de los resultados de los estudios de mercado relacionados con la potencial comercialización para consumo directo de variedades subutilizadas de *Capsicum* nativo dentro de Perú y Bolivia. La comercialización para consumo directo sería uno de los principales canales de distribución que podría beneficiar a los pequeños agricultores más pobres, a quienes –en un primer momento– les sería difícil realizar un procesamiento adicional.

Estos estudios fueron elaborados o supervisados por la Universidad de Hannover, dentro del ámbito del proyecto “Descubriendo el potencial de la diversidad de los cultivos olvidados para la diferenciación de productos de alto valor y la generación de ingresos para los pobres: El caso del *Capsicum*

en su centro de origen”, el cual es coordinado por Bioersity International y financiado por la Cooperación Alemana (GIZ).

Como parte del estudio de mercado de Perú, se aplicó una encuesta a 205 hogares de Lima, cuyo resultado sugiere que casi la totalidad de hogares compra y consume al menos una variedad de ajíes nativos (92%). Por otra parte, las variedades compradas y consumidas regularmente son básicamente cuatro: el ají amarillo (*Capsicum baccatum*), rocoto (*Capsicum pubescens*), el ají panca y el ají limo (variedades que pertenecen a la especie *Capsicum chinense*).

En la mayoría de los hogares que no compran o consumen variedades nativas, se mencionó que el motivo era porque “no sabían que existían otras variedades nativas”, o que “no sabían en qué platos utilizarlas” (48%). En este sentido, los resultados de este estudio indican que el consumidor limeño promedio aún no diversifica su consumo de ajíes nativos dentro de la dieta familiar, porque desconoce la existencia de la amplia variedad de ajíes nativos, con sabores particulares, y usos específicos, así como su contenido de vitaminas y antioxidantes.

Para el incremento de su consumo es necesario informar al consumidor sobre los posibles usos y beneficios que ofrecen estos ajíes nativos alternativos; por ejemplo, a través de



Distintas variedades de *Capsicum* en el mercado
Foto: Autora

un etiquetado que incluya algunas recetas de cocina u otras sugerencias de cómo utilizar estas variedades nativas actualmente subutilizadas.

Con respecto al estudio de mercado en Bolivia, que encuestó a 350 hogares en La Paz y Cochabamba, se encontró que los ajíes nativos secos importados desde el Perú representan casi el 50 % del consumo nacional de ajíes nativos secos en estas ciudades.

El consumo de ajíes nativos en Bolivia se da casi exclusivamente en estado seco, siendo la principal excepción el locoto (o rocoto, como es conocido en Perú: *Capsicum pubescens*), el cual se consume mayormente en estado fresco. Por otra parte, aunque los precios de los ajíes peruanos son iguales o más altos que los de los bolivianos; el estudio señala que gran parte de hogares bolivianos está habituado al consumo de ajíes provenientes de Perú, lo cual estaría basado principalmente en su sabor característico. Sin embargo, los consumidores bolivianos preferirían el color más intenso de los ajíes secos bolivianos, siendo esta la principal ventaja de las variedades bolivianas frente a las peruanas.

Por lo tanto, en el caso de Bolivia, los ajíes nativos subutilizados pueden ser parte de una cadena de valor muy interesante que debería ser analizada desde una perspectiva del

potencial desplazamiento de ajíes peruanos secos de contrabando por variedades nativas bolivianas con características mínimas de sabor y color específicas, lo cual aún no se ha contemplado en toda su dimensión.

Dra. Jaqueline García Yi

Investigadora del Instituto de Economía Ambiental y Comercio Mundial, Universidad de Hannover, Alemania
Correo-e: garcyai@iuw.uni-hannover.de



Día internacional de lucha contra las represas por los ríos, por el agua y por la vida

El Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) convoca a a sumarse y apoyar las movilizaciones que se llevarán a cabo el próximo 14 de marzo de 2012, para denunciar las consecuencias sociales, económicas, culturales y ambientales que ha causado históricamente el modelo hidroenergético (cerca de 80 millones de personas han sido desplazadas por la construcción de represas en el mundo). Más información en: <http://www.mabnacional.org.br/>

Conflicto de tierras en el norte de Santiago del Estero

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Argentina, denuncia la violencia que sufren los integrantes de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, por defender su territorio. Cristian Ferreyra, de 23 años, fue baleado cuando se negó a dejar el territorio donde ha vivido toda su vida, pretendido por un empresario. Durante dos años han sido asesinados en la Argentina cuatro campesinos e indígenas. El MOCASE (aliado de La Vía Campesina) denunció que la represión tiene relación directa con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva, sobre territorios comunitarios. Más información: <http://mocase-vc.blogspot.com/>

Acaparamiento de tierras, gobernanza y corrupción en Latinoamérica

El acaparamiento y extranjerización de tierras se intensifican en América Latina. Martine Dirven, especialista, opina que estamos ante “un proceso de extranjerización de las tierras importantes”. Para el director del Centro Peruano de Estudios Sociales, Fernando Eguren, el proceso “también tiene que ver con restricciones en la democracia”. Tras estudiar el tema en 61 países, la FAO y el organismo mundial anticorrupción Transparencia Internacional (TI) concluyeron que una gobernanza débil incrementa la posibilidad de corrupción en la tenencia y administración de la tierra, al tiempo que intensifica el impacto de la presión sobre su uso. Lourdes Pérez Navarro, Prensa Latina. Fuente: <http://farmlandgrab.org/post/view/20024>

Marcha del Agua exitosa en Perú



Los participantes de la Marcha del Agua comenzaron con una ceremonia de ‘pago a la tierra’, tradicional andina, en las lagunas de las alturas de Celendín, Cajamarca, al norte del Perú, donde se pretende desarrollar el proyecto Conga de la Minera Yanacocha, propiedad de la transnacional Newmont, e iniciaron la marcha. En el camino se fueron sumando personas y, al llegar a Lima, 861 kilómetros después, eran más de mil campesinos de muchos lugares en un país donde los conflictos por la tierra y el agua son múltiples, tanto con explotaciones mineras como con latifundios para la exportación. Al llegar a la capital la marcha creció a más de diez mil personas. Fueron al Congreso de la República a dejar un proyecto de ley que declara intangibles las cabeceras de cuenca y prohíbe el uso del cianuro y el mercurio en la minería, y otro proyecto que reclama una enmienda constitucional para declarar el derecho humano al agua. Más de información: www.celendinlibre.wordpress.com y al correo: marcoaz.ccperu@gmail.com (Marco Arana, Coordinador Nacional de la Marcha del Agua). Foto: www.lamula.pe

LEISA 28-2 convocatoria

Ecologizando la economía

La próxima conferencia Río +20, que tendrá lugar en junio de 2012, en Río de Janeiro, se centrará en la importancia de ‘ecologizar la economía’ (ver página 40). Según el PNUMA, una ‘economía verde’ describe un sistema económico “que se traduce en mejorar la equidad de las condiciones del bienestar humano y social, y a la vez reducir de manera significativa los riesgos ambientales”.

En su expresión más simple, una economía verde puede ser definida como “una economía que es baja en carbono, usa los recursos eficientemente y es democrática en todo su actuar”. ¿Son estas solo palabras bonitas para describir un objetivo imposible? Muchos grupos sociales se muestran escépticos y advierten que, a menos que se produzcan cambios fundamentales, la economía verde no será más que uno de los tipos de ‘lavado’ de recursos financieros; en este caso, un ‘lavado verde’. Otros son más positivos: piensan que con valor, voluntad y una visión clara de lo que es importante hacer para enfrentar las actuales amenazas a la sostenibilidad de la vida en el planeta, podemos cambiar la economía.

Río+20 reflexionará sobre los acontecimientos de los pasados 20 años, y LEISA también lo hará en la edición 28-2. ¿Cuáles han sido los cambios desde la primera conferencia de Río en 1992? ¿Estamos caminando en la dirección correcta?

Comparta sus opiniones e ideas sobre el futuro de la agricultura ecológica y sus principales actores: los agricultores familiares o campesinos, y también aquellas experiencias que muestran su rol actual, tanto el de los varones como el de las mujeres. Estos agricultores tienen mucho que mostrar y mucho que decir: ¿cómo hacer que sus voces sean escuchadas? ¿Cuál es el mensaje que queremos llevar a Río +20?

Por favor, visite nuestra página web y deje sus comentarios y opiniones. Sus artículos para la edición de junio de LEISA revista de agroecología puede enviarlos a: Teresa Gianella, editora, antes del 20 de abril de 2011.

Correo-E: leisa-al@etcandes.com.pe



¿Qué matices proporcionará?

LAURA EGGENS Y EDITH VAN WALSUM



Mapa que muestra el apoyo a Río+20 en el mundo.
Fuente: portal en internet de Río+20 (<http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=116>)

Hace veinte años se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Muchas de las recomendaciones formuladas en 1992 siguen válidas hoy. En junio de este año, numerosos gobiernos enviarán nuevamente delegaciones a Río, para realizar un balance de lo que se ha logrado y para hacer frente a nuevos desafíos. Todo está casi listo para la conferencia de 2012, "Río+20", que se centrará en un modelo económico que promueva el desarrollo sostenible. Tiene como objetivo erradicar la pobreza con una 'economía verde', y crear el marco institucional necesario para ello. Participarán en la conferencia representantes gubernamentales de alto nivel de los estados miembros, junto con organizaciones no gubernamentales interesadas en participar en los 'grupos principales' formalmente constituidos, en representación de agricultores, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y pueblos indígenas entre otros actores.

¿Lavado verde o una oportunidad histórica?

Hay quienes temen que Río+20 sea una repetición de la conferencia de 1992 y se convierta en otro evento en el que la necesidad de erradicar la pobreza y rescatar el medioambiente se discutan sin llegar a ningún resultado concreto. Se preguntan si Río+20 dará lugar a las medidas 'verdes' que se han formulado a partir del sistema actual, que ha causado la mayor parte de los problemas que estamos tratando de resolver. El Grupo de Mujeres Mayores ha enfatizado que una 'economía verde' no necesariamente

contribuye a la erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible. Existe el riesgo de que el término 'economía verde' se utilice para un 'lavado verde' de las actuales prácticas económicas insostenibles. En lugar de esto, Río+20 debe centrarse en cuestionar y transformar radicalmente el paradigma económico actual.

Otros, más optimistas, argumentan que Río+20 es una oportunidad histórica para transformar los compromisos abstractos en acciones concretas. Puede ser una plataforma para la transformación. Hay posibilidades reales de incrementar las prácticas sostenibles y viables en apoyo a los sistemas alimentarios locales.

La agricultura es parte del problema y de la solución. ¿Cómo podemos pasar de los modelos insostenibles en el sistema mundial de alimentación y la agricultura, hacia un sistema mucho más diverso, justo y respetuoso de los pequeños agricultores familiares y entornos ecológicos del mundo? Los cambios de apariencia no son suficientes. Los principales grupos de agricultores, organizaciones de la sociedad civil y mujeres están fortaleciendo la causa de la agricultura familiar sostenible, de los sistemas alimentarios regionalizados y de la ampliación de los enfoques agroecológicos. La agricultura puede alimentar a todo el mundo con comida saludable, diversa y culturalmente apropiada, siempre y cuando las decisiones políticas que se tomen sean las correctas. Los resultados de Río+20 deben apoyar los derechos y el acceso a los recursos para las mujeres y los pueblos indígenas. La apropiación de tierras tiene que ser detenida y la producción de alimentos no debe ser comprometida para

No puede haber una economía verde sin agricultura familiar sostenible

La agricultura es parte del problema y de la solución. ¿Cómo podemos pasar de los modelos insostenibles en el sistema mundial de alimentación y la agricultura, hacia un sistema mucho más diverso, justo y respetuoso de los pequeños agricultores familiares y entornos ecológicos del mundo? Los cambios de apariencia no son suficientes. Los principales grupos de agricultores, organizaciones de la sociedad civil y mujeres están fortaleciendo la causa de la agricultura familiar sostenible, de los sistemas alimentarios regionalizados y de la ampliación de los enfoques agroecológicos. La agricultura puede alimentar a todo el mundo con comida saludable, diversa y culturalmente apropiada, siempre y cuando las decisiones políticas que se tomen sean las correctas. Los resultados de Río+20 deben apoyar los derechos y el acceso a los recursos para las mujeres y los pueblos indígenas. La apropiación de tierras tiene que ser detenida y la producción de alimentos no debe ser comprometida para

la producción de biocombustibles. Debe restaurarse la financiación pública para el desarrollo agrícola, incluyendo el apoyo a la generación de conocimiento participativo y su difusión.

La construcción de una hoja de ruta

Necesitamos una hoja de ruta informada e inspirada en las experiencias concretas de los agricultores. Los éxitos y fracasos, que nos informan sobre los obstáculos a la ampliación de prácticas sostenibles, deben ser compartidos y sistematizados. Río+20 deberá impulsar los esfuerzos de documentación de la experiencia. En las revistas de la red **AgriCulturas** compartiremos experiencias con el fin de convencer a los políticos y fortalecer a los defensores de derechos, dándoles los argumentos que necesitan. Acudimos a nuestros lectores y autores, a los agricultores y científicos, a quienes tienen un conocimiento profundo y vivencial de la agricultura sostenible, para que sus voces y sus experiencias sean escuchadas.

La agricultura familiar es fundamental en una economía verde y genuina. Actualmente la red mundial **AgriCulturas** (*The AgriCulture Network*: www.agriculturesnetwork.org), la integran cinco revistas regionales y una de nivel global; juntos llegamos a más de medio millón de protagonistas de la agricultura en 194 países. Se trata de una plataforma sólida que puede influir en el pensamiento global sobre la agricultura. Comparte tu opinión, tus sueños y tus experiencias. Mientras más inspiradoras sean las contribuciones que recibimos, más fuerte será el mensaje que podremos transmitir en Río de Janeiro.

Laura Eggens y Edith van Walsum

L.Eggens@ileia.org - E.van.Walsum@ileia.org
ILEIA, Países Bajos